



TRABAJO FIN DE ESTUDIOS / IKASGAIEN AMAIERAKO LANA
DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y
DERECHO

.....

ACCESO A LA JUSTICIA CIVIL DE LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS DE LAS
EMPRESAS TRANSNACIONALES

Xabier Pérez Zubillaga

DIRECTOR / ZUZENDARIA

José Luis Iriarte Ángel

Pamplona / Iruñea

8 de enero de 2020

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

En las últimas décadas, las grandes empresas transnacionales han extendido su actividad económica a lo largo y ancho de la esfera global. Desafortunadamente, esta dinámica ha ido ligada a reiteradas violaciones de los Derechos Humanos en las que se han visto involucradas empresas de reconocido nombre. Y mientras los grandes grupos de sociedades parecen actuar con casi total impunidad bajo un marco normativo de aparente insuficiencia, las víctimas deben enfrentarse a múltiples obstáculos en su camino para alcanzar la justicia. Es especialmente importante el relativo a justificar la competencia internacional de los tribunales para juzgar hechos ocurridos extraterritorialmente. Frente a esta problemática, el Derecho Internacional Privado y, especialmente, las sentencias recaídas bajo la aplicación del Reglamento Bruselas I bis en el ámbito de la UE, podrían ofrecer una vía de reparación civil efectiva para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos cometidas por empresas transnacionales.

Palabras clave: Empresas Transnacionales, Derechos Humanos, obstáculos, acceso a la justicia, competencia judicial internacional

ABSTRACT AND KEY WORDS

In recent decades, large transnational corporations have extended their economic activity throughout the global sphere. Unfortunately, this dynamic has been associated with continued human rights violations involving well-known companies. And while large groups of companies seem to act with almost total impunity under a normative framework of apparent inadequacy, victims must face multiple obstacles in their path to justice. Of particular importance is the issue of justifying the international competence of the courts to judge acts that have occurred extraterritorially. Faced with this problem, Private International Law and, especially, the judgments rendered under the application of the Brussels I bis Regulation at the EU level, could offer a means of effective civil reparation for the victims of human rights violations committed by transnational corporations.

Key words: Transnational Corporations, Human Rights, obstacles, access to justice, international jurisdiction

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN.....	4
II. PARADIGMA ACTUAL.....	6
1. El Derecho Internacional de los DDHH: especial papel del Derecho Internacional Privado	6
2. Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos. .	10
III. VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DDHH: ALGUNOS CASOS.	14
1. Consumidores y usuarios	15
1.1 Caso contra Volkswagen AG.....	15
1.2 Caso contra empresa polaca de energía y gas	15
2. Población local	15
2.1 Caso contra Chevron-Texaco.....	15
2.2 Casos contra Shell.....	16
3. Trabajadores.....	18
3.1 Caso Rana Plaza	18
3.2 Caso contra KiK.....	18
IV. OBSTÁCULOS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA.....	19
1. Obstáculos fácticos y financieros	19
1.1 Obstáculos fácticos	19
1.2 Obstáculos financieros	24
2. Obstáculos jurídico-procesales.....	27
2.1 La competencia de los Tribunales del domicilio de la cabecera	30
V. LA EVENTUAL SOLUCIÓN EUROPEA EN CUANTO AL ACCESO A LA JUSTICIA	32
1. La competencia judicial internacional en el Reglamento Bruselas I bis.	32
2. Análisis de la competencia judicial internacional en casos europeos.	35
2.1 Caso contra Volkswagen AG.....	35
2.2 Casos contra Shell.....	36
2.3 Caso contra KiK.....	38
VI. CONCLUSIONES.....	39
VII.BIBLIOGRAFÍA.....	42

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de las siguientes páginas se aborda el amplio tema de las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos (en lo sucesivo ETN y DDHH). La relación entre estas dos esferas, como veremos, no es precisamente pacífica.¹ De hecho, en las últimas décadas, los esfuerzos por controlar los efectos adversos que la primera (ETN) causa sobre la segunda (DDHH), han crecido notablemente.

En la Sección II del presente trabajo, veremos que la regulación de esta problemática engloba una serie de instrumentos jurídicos muy variados. Y a pesar de la diversidad normativa, el acceso de las víctimas a una justicia efectiva continúa siendo un problema sin respuesta jurídica satisfactoria. Prueba de ello son las críticas de la sociedad civil contra los Principios Rectores de Naciones Unidas, un instrumento internacional que ha resultado clave pero limitado en la reciente regulación del problema de las Empresas y los Derechos Humanos. En este sentido, veremos que el Derecho Internacional Privado tiene mucho que aportar a esta materia.

Por otro lado, los datos en 2020 nos indican que, las 100 compañías más valiosas del mundo poseen una capitalización igual a 21 veces el PIB de la economía española.² Y, desgraciadamente, en la Sección III, tendremos oportunidad de comprobar que, frecuentemente, estas magníficas cifras esconden una serie de vulneraciones a los derechos humanos y medioambientales más básicos: explotaciones de recursos naturales, contaminación y saqueamiento de tierras, violaciones de los derechos laborales...

Cuando la justicia ha estado cerca de convertirse en realidad en este tipo de asuntos, las ETN han preferido concluir el asunto a través de pactos extrajudiciales, comprometiéndose a indemnizar con cuantías inferiores a las que serían condenadas en caso de acudir a un pleito. Así, la gran mayoría de damnificados por la actividad empresarial no consigue obtener una reparación efectiva. Por ello, en la Sección IV, identificamos algunas de las barreras que convierten el acceso a la justicia en un camino

¹ “¿Cuál es la responsabilidad que tiene la empresa en su relación con los Derechos Humanos? La respuesta a este interrogante nunca ha sido unánime, ni mucho menos pacífica(...)” TOLE MARTÍNEZ, J. “Debate sobre la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Derecho Humanos y empresas en Colombia: avances, críticas y retos.”, en OVEJERO PUENTE, A.M y otros, *Derechos humanos y empresas: balance y situación actual sobre el cumplimiento de los tres pilares*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pág. 42.

² MAZO, E.S., “Las 100 empresas más valiosas del mundo”, en *Expansión*, 5 de enero de 2020, recuperado de <https://www.expansion.com/empresas/>

tan complicado. Concretamente, distinguiremos entre obstáculos de naturaleza fáctica, financiera y jurídico-procesal.

En relación con el último grupo, la competencia internacional de los tribunales se presenta, a veces, como obstáculo y, otras, como oportunidad para obtener la tutela judicial efectiva. Por ello, debido a la relevancia de esta cuestión, dedicamos un pequeño epígrafe a esta problemática para acto seguido estudiar, en la Sección V, la solución que se le ha dado en el ámbito de la Unión Europea. Y ello desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, materializado en el denominado Reglamento Bruselas I bis. Para conocer con mayor profundidad la aplicabilidad de estas normas en la práctica, la sección concluye con la solución de algunos de los casos tratados previamente en la Sección III.

Finalmente, en la Sección VI presentamos las conclusiones alcanzadas tras el estudio de la compleja materia que nos ocupa. Entre las consideraciones finales, ofrecemos una pequeña reflexión sobre la necesidad de adoptar un Tratado Internacional vinculante en la materia, al tiempo que hacemos hincapié en la necesidad de garantizar el cumplimiento de un derecho tan fundamental como lo es el acceso a la justicia.

II. PARADIGMA ACTUAL

1. El Derecho Internacional de los DDHH: especial papel del Derecho Internacional Privado

Antes de abordar el tema de los DDHH y las ETN, resulta conveniente proporcionar una primera idea de qué se entiende por Derechos Humanos, qué regulación han ostentado hasta hoy y, cuál es el papel que desempeña el Derecho Internacional Privado en este campo.

Pues bien, según Naciones Unidas, los DDHH hacen referencia a los “derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”³. Así, los Derechos Humanos están basados en los principios de universalidad, indivisibilidad e inalienabilidad y se solapan parcialmente con los derechos fundamentales de las personas⁴.

Desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948⁵, las organizaciones internacionales, los Estados y otras entidades regionales, se han encargado de proveer de numerosas regulaciones a este campo. Las medidas protectoras de los derechos de las personas y de otros aspectos, como por ejemplo el medioambiente, se han extendido también al terreno de la actividad empresarial, donde convergen múltiples interesados. De esta forma, autores como Rodríguez Garavito, proponen pensar en el campo de las ETN y DDHH como un “ecosistema en el que coexisten diferentes integrantes, modelos normativos y tácticas políticas”⁶.

Algunas de las iniciativas regulatorias de los DDHH se enmarcan en el denominado *hard law*, esto es, dentro del derecho de obligado cumplimiento. Entre ellas destacan, además de la ya referida Declaración Universal de 1948, el Pacto Internacional

³ Definición de DDHH recuperada de Naciones Unidas, en <https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights>

⁴ HELMINEN, S., ALENIOUS, J., WALTA, V., Y DONNER, S. *Judicial Analysis on the Corporate Social Responsibility Act*, Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Helsinki, 2020, pág.16.

⁵ ONU, Asamblea General, *Declaración Universal de Derechos Humanos*, 10 de diciembre 1948, 217 A (III). Disponible en: [https://undocs.org/es/A/RES/217\(III\)](https://undocs.org/es/A/RES/217(III))

⁶ RODRÍGUEZ GARAVITO, C. “Empresas y derechos humanos. Un marco conceptual y un mapa de estrategias regulatorias.”, en RODRÍGUEZ GARAVITO, C. (Ed.), “*Empresas y derechos humanos en el siglo XXI*. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2018, pág. 31.

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁷ y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas⁸ de 1966, que vinculan a los países firmantes; la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vinculante desde 2007 para todos los Estados Miembros de la UE a excepción de Polonia; así como los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y los Tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en tanto que vinculan a las partes signatarias de los mismos⁹.

Por su parte, la gran mayoría de iniciativas regulatorias de derechos en el ámbito empresarial pertenecen al campo del *soft law* o el derecho no vinculante, integrado en su mayoría por recomendaciones y orientaciones. Por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacan sus “Líneas directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”¹⁰ o la “Guía de debida diligencia para cadenas de suministro responsables de minerales en las áreas de conflicto o de alto riesgo”¹¹. También en este campo se encuentran los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y DDHH¹², a los que les dedicamos un apartado propio dada su relevancia en la actualidad. Finalmente, pertenecen a la esfera del *soft law* los Códigos de conducta adoptados por empresas individuales o asociaciones empresariales transnacionales, las orientaciones de la ISO 26000 en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), y muchas otras regulaciones de esta naturaleza.

El entramado jurídico de los DDHH en situaciones transnacionales, además, ha estado tradicionalmente liderado por las iniciativas del Derecho Internacional Público (DIP), pues el mismo está ligado a la protección del interés general de los ciudadanos por parte de los Estados. En cambio, en los últimos años, el Derecho Internacional Privado

⁷ ONU, Asamblea General, *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966*. En: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf f

⁸ ONU, Asamblea General, *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966*. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf

⁹ Con respecto al control de la actividad de las ETN, la OIT publicó en 2017 la última enmienda de la “Declaración MNE”, de carácter no vinculante. Oficina Internacional de Trabajo, *Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social*, 5ª edición, Suiza, 2017. Disponible en: <https://www.ilo.org/>

¹⁰ OCDE (2013), *Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales*, OECD Publishing. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202436-es>

¹¹ OCDE (2016), *Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo: Tercera Edición*, OECD Publishing, París. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264252479-en>

¹² ONU, A/HRC/17/31, *Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"*, Nueva York y Ginebra, 27 de marzo de 2011.

(DIPr) se ha erigido como un potencial instrumento de respuesta eficaz y operativa frente a los abusos de DDHH cometidos por corporaciones transnacionales¹³.

En este sentido, es necesario recordar que el DIPr se ha dedicado tradicionalmente a dar respuesta a los conflictos jurídicos surgidos entre individuos o corporaciones en el ámbito internacional. Análogamente, de los conflictos surgidos entre dos o más Estados, o entre estos y las organizaciones internacionales, se ha ocupado el DIP. Y a pesar de esta diferenciación teórica, los objetos de ambas ramas ya no se consideran herméticamente separados entre sí, sino que más bien estamos presenciando una complementariedad o *permeabilidad* entre ambos Derechos¹⁴.

Autores como De Dycker apuntan, por un lado, a que el DIP ha contribuido a fomentar una interpretación armonizada de las normas del DIPr, especialmente, cuando los Estados han planteado controversias de esa índole ante la Corte Internacional de Justicia. También los tribunales de derechos humanos han contribuido enormemente a la evolución de derechos económicos, sociales y culturales¹⁵. Y, sin embargo, el DIP se ha mostrado insuficiente a la hora de regular los derechos y obligaciones de los agentes no estatales¹⁶. En este sentido, la contribución del DIPr ha sido primordial para responder a cuestiones de jurisdicción (*forum*), derecho aplicable (*ius*) y reconocimiento y ejecución de sentencias en todos aquellos casos que presentan un elemento de extranjería o más bien un elemento internacional.

¹³ IRIARTE ÁNGEL, J.L. “Empresas Multinacionales y Derechos Humanos. Un análisis reciente desde la perspectiva española”, en MARULLO, M. C. Y ZAMORA CABOT, F.J. (Eds.). *Empresas y Derechos Humanos. Temas Actuales*. Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pág.95.

¹⁴ DE DYCKER, S. “Permeability and Complementarity of Public and Private International Law: The Case of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, en ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHER, L., DE DYCKER, S. (Eds), *Implementing the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights. Private International Law Perspectives*, Schulthess Éditions Romandes, Geneva – Zurich, 2017, pág. 13 y ss.

¹⁵ Nos referimos a sentencias emanadas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o de jurisprudencia dictada en el contexto de la justicia transicional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina y la Corte Constitucional de Colombia, entre otras. Ver Informe sobre *Justicia Transicional y Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Naciones Unidas, New York y Ginebra, 2014, pág.27.

¹⁶ “El Derecho internacional tradicional está protagonizado por Estados, razón por la cual, a día de hoy y a pesar de algunos avances significativos, aún no cuenta con los instrumentos de tutela eficaces para afrontar esta nueva realidad, global y heterogénea, en la cual intervienen actores no estatales.” VIVAS TESÓN, I. “La responsabilidad civil en los reglamentos de la Unión Europea en relación con la actividad de las empresas”, en MÁRQUEZ CARRASCO, C. Y VIVAS TESÓN, I. *La Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos por la Unión Europea y sus Estados Miembros*. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pág. 127.

Precisamente, retomando la perspectiva de las ETN, el DIPr se presenta como la fuente jurídica encargada de regular una de las condiciones *sine qua non* para hacer realidad el acceso de las víctimas a la justicia: la competencia judicial internacional.¹⁷ Esta cuestión es de máxima importancia, pues el acceso a la reparación no es posible si no se acredita la competencia jurisdiccional del tribunal frente al que se reclama justicia. Más concretamente, la dificultad radica en el hecho de que las demandas de esta naturaleza se interponen con frecuencia en el país origen de la empresa cabecera, país distinto al lugar donde se ocasionan los daños por empresas subsidiarias. A este respecto, veremos que el DIPr contiene reglas de atribución de competencia jurisdiccional que, normalmente, posibilitan que un tercer Estado (en principio ajeno al lugar del daño, pero vinculado a él con base en unos criterios de conexidad o foros) pueda entrar a juzgar de forma extraterritorial el asunto que se le plantea.

Además de estas reglas, y desde el punto de vista de las víctimas, el DIPr ha resultado en la práctica un instrumento de acceso a la justicia más efectivo que la vía penal, dado que esta última presenta un ámbito de aplicación más restringido, únicamente aplicable a hechos constitutivos de crímenes internacionales, genocidio, crímenes de guerra o agresiones (que, dicho sea de paso, también han ocurrido en la esfera de las ETN y los DDHH).¹⁸ Por tanto, a pesar de que se contemplan diversas formas de reparación a las víctimas (incluyendo vías extrajudiciales), la naturaleza privada del DIPr facilita la obtención de una eventual indemnización monetaria por los daños sufridos. Y ello a través de las diversas acciones judiciales que se ofrecen en la rama del DIPr, tales como las acciones de responsabilidad extracontractual, las acciones de reclamaciones pecuniarias derivadas de la responsabilidad civil, o acciones de indemnización de daños y perjuicios.

En síntesis, el DIPr actúa como un instrumento potencial para reivindicar valores protegidos por los DDHH como la integridad física, la privacidad o la propiedad, entre otros¹⁹. Y, sin estar desprovisto de obstáculos, una gran mayoría de las víctimas de abusos

¹⁷ “To be able to enjoy protection of their human rights in transnational tort litigations against MNCs, victims of corporate human rights abuses need to come within the human rights jurisdiction of the state concerned.” AUGENSTEIN, D. Y JÄGERS, N. “Judicial Remedies: the issue of jurisdiction.”, en ÁLVAREZ RUBIO, J.J. Y YIANNIBAS, K (Eds.). *Human Rights in Business. Removal of Barriers to Access to Justice in the European Union*. Routledge, Abingdon, 2017, pág. 11.

¹⁸ KYRIAKAKIS, J. “Atrocities and victim redress: the opportunities and challenges of international criminal justice”, en DEVA, S. Y BIRCHALL, D. (Eds). *Research Handbook on Human Rights and Business*. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2020, págs. 513 y ss.

¹⁹ AUGENSTEIN, D. Y JÄGERS, N. “Judicial Remedies: the issue of jurisdiction.”, en ÁLVAREZ RUBIO, J.J. Y YIANNIBAS, K (Edit.). *Human Rights in Business...*, op. cit., 2017, pág. 9.

por parte de ETN está recurriendo al procedimiento civil como vía de acceso a la justicia²⁰.

2. Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos.

En 2005, John Ruggie fue designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como Representante Especial del Secretario General de Naciones para las Empresas y Derechos Humanos (RESG). A estos efectos, su labor consistiría en identificar y aclarar lo que se espera de las empresas en el ámbito de los derechos humanos²¹.

Tras los tres primeros años de su mandato, Ruggie presentó el Marco “Proteger, Respetar y Reparar” construido sobre tres pilares: (i) el deber de los Estados de *proteger* los derechos humanos; (ii) la responsabilidad de las empresas de *respetar* los derechos humanos; (iii) y, el acceso efectivo a la *reparación* de las víctimas.

Posteriormente, tras una prórroga del mandato por otros tres años, la ONU aprobaría en 2011 los Principios Rectores (PR) en materia de Empresas y Derechos Humanos, contruidos sobre el referido esquema tripartito. Así, este instrumento responde al desafío de “cerrar la brecha entre procesos económicos transnacionales, por un lado, y la regulación de los deberes y las responsabilidades de las empresas y los Estados, por el otro”²².

En cuanto al alcance de este instrumento, la compilación de los 31 principios rectores es clara al establecer que se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura. No obstante, unas líneas más adelante, es igualmente esclarecedora cuando dispone que “en ningún caso debe interpretarse que estos Principios Rectores establezcan nuevas obligaciones de derecho internacional ni que restrinjan o reduzcan las obligaciones legales que un Estado haya asumido [...]”²³.

²⁰ FRA. European Union Agency for Fundamental Rights. Report on *Business and Human Rights - Access to Remedy*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, pág. 44.

²¹ ONU, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2005/L.87, *Human rights and transnational corporations and other business enterprises*, Geneva, 15 de abril de 2005.

²² RODRÍGUEZ GARAVITO, C. “Empresas y derechos humanos. Un marco conceptual y un mapa de estrategias regulatorias.”, en RODRÍGUEZ GARAVITO, C. (Ed.), *Empresas y derechos humanos en el siglo XXI...*, *op. cit.*, pág. 29.

²³ Naciones Unidas, A/HRC/17/31, *Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos...*, *op. cit.*, pág. 1

Estamos, por tanto, ante una regulación de carácter global, pero no vinculante. Además, debe añadirse una dimensión pretendidamente dinámica. Tal dimensión se hace notar en que los PR deben ser implementados por los Estados a través de sus respectivos Planes de Acción Nacionales (PAN), tal y como lo han hecho ya alrededor de 20 Estados²⁴. En el concreto caso español, el PAN sobre Empresas y DDHH fue objeto de un largo y complejo proceso de elaboración. Si bien los primeros borradores fueron publicados en 2013 y 2014, la versión definitiva no sería aprobada hasta dos años y medio después, en julio de 2017²⁵.

Igualmente, el dinamismo de los Principios Ruggie se aprecia en la creación específica de un Grupo de Trabajo (GT), compuesto por cinco expertos independientes de orígenes geográficos distintos, cuya finalidad ha sido el ulterior desarrollo y la puesta en práctica de los PR. Las voces críticas de la sociedad civil, sin embargo, denuncian la lentitud con la que el GT ha tratado la cuestión de los remedios efectivos. Cuestión que está, en última instancia, directamente ligada con las necesidades de las víctimas y los grupos afectados²⁶.

Precisamente, por el interés para el presente trabajo, debemos destacar el contenido del Tercer Pilar, que lleva por nombre el “Acceso a Mecanismos de Reparación”. En él queda consagrado el derecho de acceso a la justicia en lo relativo al ámbito de las empresas y los derechos humanos, que cabe recordar se trata de un derecho

²⁴ En Europa, la adopción de los Planes de Acción Nacionales se ha producido en Reino Unido, en 2013 (versión modificada en 2016); Países Bajos, en 2013; Noruega, en 2015; Suiza, en 2016; Dinamarca, en 2016; Finlandia, en 2014; Lituania, en 2015; Suecia, en 2015; Italia, en 2016; Alemania, en 2016; Francia, en 2017; España, en 2017; Polonia, en 2017; Bélgica, en 2017; República Checa, en 2017; Irlanda, en 2017; República de Eslovenia, en 2018; Luxemburgo, en 2020. Fuera del continente europeo, algunos de los Estados que han adoptado Planes de AN son: Colombia, en 2015; EE. UU. en 2016; Chile, en 2017; Kenia, en 2019; Tailandia, en 2019; y, Japón, en 2020. Fuente: ACNUDH, Planes de acción nacionales. Recuperado de: <https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx>,

²⁵ El Plan español fue publicado en el *BOE* núm. 222, 14 de septiembre de 2017, Sec. III. Pág. 90384, disponible en <https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10516.pdf>. Vid. también: MÁRQUEZ CARRASCO, C. “Los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos de los estados miembros de la Unión Europea. Especial referencia al plan español.”, en MÁRQUEZ CARRASCO, C. Y VIVAS TESÓN, I. *La Implementación de los Principios Rectores...*, *op. cit.*, págs. 81 y ss.

²⁶ RODRÍGUEZ GARAVITO, C. “Empresas y derechos humanos. Un marco conceptual y un mapa de estrategias regulatorias.”, en RODRÍGUEZ GARAVITO, C. (Ed.), *Empresas y derechos humanos en el siglo XXI...*, *op. cit.*, págs. 39 y 40.

fundamental recogido en diversa normativa internacional²⁷. Concretamente, el Principio fundacional de este capítulo reza como sigue:

*Principio Rector 25: Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces.*²⁸

Ahora bien, si los Principios Ruggie constituyen el marco internacional más reconocido hasta la fecha en materia de ETN y DDHH²⁹, los mismos no están exentos de crítica. Lejos de ello, existen grandes controversias en torno a su creación y elaboración, especialmente, emanadas desde el campo del activismo y las organizaciones de la sociedad civil.

A este respecto, la cuestión clave que separa a los partidarios y detractores de los Principios parece deberse, en primer lugar, al carácter no vinculante de este instrumento. Ejemplo de esta brecha es que, por un lado, el propio John Ruggie alude a la voluntariedad como posible razón del éxito de los Principios³⁰; mientras que, por otro lado, autores como Guamán Hernández, señalan que el problema de los PR es la “instauración de la voluntariedad como criterio rector”, porque desplaza así la necesidad de normas vinculantes del derecho internacional³¹.

En todo caso, dada la especial sensibilidad y moralidad con la que deben tratarse los DDHH, algunas críticas se dirigen contra el contenido del Principio Rector 12, donde se hace referencia a la *responsabilidad* de las empresas (que no obligación) de respetar,

²⁷ El derecho de acceso a la justicia viene reconocido en numerosas disposiciones del Derecho Internacional. Entre otras, podemos señalar el art. 10 de la Declaración Universal de DDHH; los arts. 6 y 13 del Convenio Europeo de DDHH; el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE; o el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

²⁸ Principio Rector 25. En ONU, A/HRC/17/31, *Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos...*, op. cit., pág. 35

²⁹ HÄUSLER, K., LUKAS, K. Y PLANITZER, J. “Company-based grievance mechanisms and international arbitration”, en ÁLVAREZ RUBIO, J.J. Y YIANNIBAS, K (Eds.). *Human Rights in Business. Removal of barriers...*, op. cit., pág. 80.

³⁰ RUGGIE J.G., “¿Jerarquía o ecosistema? La regulación de los riesgos relativos a los derechos humanos provenientes de las empresas multinacionales”, en RODRÍGUEZ GARAVITO, C. (Ed.). *Empresas y derechos humanos en el siglo XXI...* op. cit., pág. 76.

³¹ GUAMÁN HERNÁNDEZ, A. Y MORENO GONZÁLEZ, G. *Empresas transnacionales y derechos humanos: la necesidad de un instrumento vinculante*. Editorial Bomarzo, Albacete, 2018, págs. 79 y 80.

como mínimo, los derechos fundamentales enunciados en la Carta Internacional de DDHH y los establecidos en la Declaración de la OIT. Con esta regulación de mínimos, denuncian, se dejan fuera tratados igualmente centrales y relevantes, como los relativos a los derechos de las mujeres, las víctimas de la discriminación racial, los niños o las personas con discapacidades³².

Finalmente, la insuficiencia de los Principios Ruggie no solo se ha predicado de su contenido o de su no obligatoriedad para las empresas. También ha sido tildada de insuficiente la participación que le ha sido otorgada en su creación a los activistas y a las organizaciones de la sociedad civil, que representan la voz principal de las víctimas. Así, los defensores de los DDHH insisten en que “las comunidades perjudicadas deberían tener la capacidad y la voz para intervenir por sí mismas en los procesos de decisión que afectan a sus vidas, como sujetos activos del derecho y no como meros objetos”, algo que en la práctica no parece haber ocurrido con plena suficiencia³³.

Dejando estas consideraciones a un lado, la doctrina sí parece unánime al sostener que, de los tres pilares de los Principios Rectores, el tercero sobre “acceso a mecanismos de reparación” es el que menor atención ha recibido³⁴. Por tanto, el acceso a la justicia continúa hoy siendo tan esquivo como antes, y la provisión de mecanismos de reparación a los afectados se encuentra todavía llena de óbices que merecen ser estudiados.

³² DEVA, S. “Empresas y derechos humanos: ¿momento de ir más allá del “presente”?, en RODRÍGUEZ GARAVITO, C. (Ed.). *Empresas y derechos humanos en el siglo XXI... op. cit.*, pág. 99 y ss.

³³ “(...) las ONG de derechos humanos [...] han tomado una postura crítica hacia los Principios Rectores. Si bien su disposición a relacionarse con los PR varió, todas tienden a considerar “regresiva” su estructura, a verlos como un “paso atrás” en la protección de los derechos humanos, como una herramienta basada en un modelo de buena voluntad que no sólo ha demostrado ser ineficaz tras décadas de pruebas y experimentación creativas, sino que tampoco tiene en cuenta los componentes esenciales de un enfoque de derechos humanos con respecto al cambio social MELISH, T.J., “Volver a incluir “los derechos humanos” en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Cambiar de marco e incorporar los derechos de participación”, en RODRÍGUEZ GARAVITO, C. (Ed.). *Empresas y derechos humanos en el siglo XXI..., op. cit.*, págs. 118 y 126.

³⁴ Punto 8 del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Mejorar la rendición de cuentas y el acceso a las reparaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales*, 2016, pág. 4; estudio para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de ZERK, J., *Corporate Liability for Gross Human Rights Abuses. Towards a Fairer and More Effective System of Domestic Law Remedies*, 2014; ÁLVAREZ RUBIO, J.J. Y YIANNIBAS, K (Eds.), *Human Rights in Business. Removal of Barriers...*, op. cit., pág. 2; PIGRAU, A., “Empresas multinacionales y derechos humanos: la doble vía del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, en CHIARA MARULLO, M. Y ZAMORA CABOT, F.J., *Empresas y Derechos Humanos...*, op. cit., 2018, págs. 49-50.

III. VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DDHH: ALGUNOS CASOS.

Si bien las vulneraciones de DDHH no son estrictamente una novedad, lo cierto es que durante las décadas del siglo XX y en las primeras del siglo XXI, el mundo ha sido testigo de un alarmante incremento de casos en los que corporaciones multinacionales de renombre, se han visto envueltas en escándalos relativos a graves violaciones de DDHH³⁵. Google, Apple, Tesla, Yahoo!, Nestlé, Samsung... son tan solo algunos de los nombres más conocidos y que han dado prueba de ello. Sin embargo, es curioso señalar que, casi la mitad de las violaciones de derechos son cometidas por empresas extractivas, habitualmente menos conocidas por el público, pero cuya actividad minera, petrolera o gasística, concentra altísimos riesgos para la preservación de los DDHH y ambientales.

Por su parte, las víctimas se encuentran en el último escalón de las cadenas de suministro mundiales, en una posición de completa vulnerabilidad y desequilibrio absoluto con respecto a las grandes transnacionales. Siguiendo el Informe de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE de 2020³⁶, podemos agrupar a las víctimas de estos abusos en tres categorías principales: consumidores (víctimas de prácticas desleales y fraudes); población local (pueblos afectados por la contaminación de su hábitat); y trabajadores (que incluye tanto a trabajadores directos como empleados de las empresas subsidiarias o subcontratadas). A esta clasificación podríamos añadir una cuarta categoría de víctimas, representada por los defensores y activistas de los DDHH, quienes han recibido más de 2.000 ataques durante el periodo 2015-2019³⁷.

Sin embargo, manteniendo la triple clasificación anterior, presentamos una serie de casos reales que ilustran significativamente tanto el perfil de las partes (víctimas y ETN) como la gravedad de los hechos. Además, con posterioridad, retomaremos algunos de los casos que se exponen a continuación, concretamente los casos contra Volkswagen, Shell y KiK, para conocer la resolución de los tribunales con respecto a la problemática de la competencia internacional.

³⁵ AYMERICH OJEA, I., Y GARCÍA CÍVICO, J. “La integración de responsabilidades públicas y privadas en la efectividad de los derechos humanos”, en MARULLO, M. C. Y ZAMORA CABOT, F.J. (Eds.). *Empresas y Derechos Humanos...*, op. cit., pág. 8.

³⁶ FRA. European Union Agency for Fundamental Rights. Report on *Business and Human Rights - Access to Remedy*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020.

³⁷ De entre esos ataques, 572 fueron registrados solo en el año 2019, según el Centro de Información sobre Empresas y DDHH. Recuperado de: <https://dispatches.business-humanrights.org/hrd-january-2020/index.html>

1. Consumidores y usuarios

1.1 Caso contra Volkswagen AG

En septiembre de 2015, la gigante alemana Volkswagen desató un escándalo al admitir que, en al menos 600.000 de sus coches, se había introducido un software expresamente diseñado para alterar los resultados de las emisiones contaminantes de sus motores diésel. En septiembre de 2018, la organización austríaca de consumidores Verein für Konsumenteninformation (VKI) interpuso una demanda contra la empresa alemana en representación de 574 compradores, ejercitando una reclamación por daños extracontractuales en el ahora conocido como caso *Dieselgate*³⁸.

1.2 Caso contra empresa polaca de energía y gas

El segundo ejemplo nos lleva a la problemática ETN-DDHH acontecida en el ámbito interno de un Estado Miembro de la UE, en Polonia. Durante 2018, una compañía polaca de energía y gas manipuló telefónicamente a un grupo de personas para que firmaran un contrato de suministro con ella. Dado que las llamadas se realizaron en horario de trabajo y a teléfonos fijos, parece que hubo una manifiesta intención de captar firmas de la tercera edad. Así, muchos ancianos, víctimas de la presión, afirmaron no haber entendido los términos del contrato o ni siquiera ser conscientes de haberlos suscritos. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso, el Defensor de los Consumidores interpuso la correspondiente demanda ante los tribunales de Varsovia³⁹.

2. Población local

2.1 Caso contra Chevron-Texaco

El asunto relativo a Chevron-Texaco es uno de los ejemplos más reconocidos en la litigación internacional de ETN y DDHH. La batalla judicial de este caso lleva vigente desde hace más de 25 años y ha sido conocida por tribunales de múltiples jurisdicciones como Estados Unidos, Ecuador, Canadá, Argentina, Brasil o Países Bajos.

³⁸ LEGGET, T. “Cómo Volkswagen trató de encubrir el ‘terrible’ fraude de las emisiones contaminantes”, 5 de mayo de 2018, en BBC News, recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-44014908>.

³⁹ FRA. European Union Agency for Fundamental Rights. Report on *Business and Human Rights - Access to Remedy*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, pág. 31

La empresa petrolera Texaco (predecesora de Chevron) desarrolló una serie de actividades extractoras de petróleo durante los años comprendidos entre 1964 y 1990. Estas dieron lugar a una de las mayores catástrofes ambientales conocidas en la historia: fosas e infraestructuras irregulares, millones de litros de crudo derramados sobre miles de hectáreas, destrucción de plantas y especies protegidas, vidas humanas devastadas... Las víctimas locales de la región amazónica del Ecuador emprendieron sus primeras acciones legales en el Tribunal del distrito Sur de Nueva York, con base en el *Alien Tort Claims Act (ACTA)*⁴⁰. Sin embargo, no sería hasta dos décadas después, en 2013, hasta que el Tribunal Supremo de Ecuador condenara a Chevron al pago de 9,5 billones de dólares. Lejos de convertirse en solución definitiva, los reiterados intentos de conseguir el reconocimiento y la ejecución de la sentencia en el extranjero han fracasado. A mayor abundamiento, la implacable defensa de la multinacional recurrió a la vía del arbitraje internacional, manteniendo la batalla hasta el día de hoy⁴¹.

2.2 Casos contra Shell

La empresa petrolera Royal Dutch Shell (RDS), igualmente, arrastra un amplísimo historial de violaciones de DDHH. Durante los últimos veinte años, la empresa angloholandesa ha sido protagonista de numerosos desastres ecológicos en el Delta del Níger, como consecuencia de los derrames de petróleo provocados por la actividad de su filial nigeriana. En todo este tiempo, las más de 40,000 víctimas de las comunidades locales de Ogale, Bille y Bodo, han padecido la vulneración de derechos tan básicos como el derecho a la salud, a la alimentación y al agua. Sin contar con el impacto económico derivado de la imposibilidad de pescar en un río contaminado, o explotar unas tierras devastadas. Ello ha dado lugar a una serie de procedimientos judiciales iniciados en

⁴⁰ El Alien Tort Claims Act (ATCA) o Alien Tort Statute (ATS), 28 U.S.C §1350, es una norma estadounidense que, por su alcance y ámbito de aplicación, ha resultado fundamental para juzgar graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el extranjero. Precisamente, esta vieja norma faculta a los juzgados federales estadounidenses para conocer los casos en que un extranjero reclama violaciones graves de Derechos Humanos contrarias al *ius cogens* y a tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos de América. Así, desde la década de los ochenta, la ATCA ha sido utilizada recurrentemente por las víctimas como instrumento para acceder a la jurisdicción norteamericana. Sin embargo, los Tribunales federales que, en un principio se mostraron receptivos a declararse competentes en este tipo de asuntos, han ido moldeando la jurisprudencia derivada de esta norma a lo largo de los años hasta que, en 2013 y 2014, las sentencias en los casos de *Kiobel v. Shell* y *Daimler v. Bauman* restringieron notablemente la aplicabilidad de este estatuto. Vid. por todos: MARULLO, M. C., *El Alien Tort Claims Act de 1789: Su Contribución En La Protección De Los Derechos Humanos Y Reparación Para Las Víctimas*, Institut Català Internacional per la Pau Barcelona, 2014.

⁴¹ REQUEJO ISIDRO, M. "Effective Access to remedy: the Lago Agrio Litigation", en ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHALER, L., Y DE DYCKER, S. (Eds), *Implementing the U.N. Guiding Principles...*, op. cit., págs. 93-115.

Europa contra el grupo de empresas de Shell. Entre ellos destacan: el caso de la comunidad de *Bodo*, los *Cuatro casos de agricultores*, y el caso de *Okpabi y otros*.

Unida a la catástrofe ambiental, la empresa petrolera se ha visto involucrada en un asunto igualmente grave que, por su relevancia en litigación internacional, merece ser estudiado. Se trata del caso *Kiobel v. Shell*, cuyos hechos se remontan a la década de los noventa. Un grupo de activistas nigerianos comenzó entonces un movimiento de repulsa contra la actividad dañina de Shell en su comunidad de Ogoniland. La empresa, por su parte, solicitó la intervención del gobierno, formado por el ejército nigeriano, con el fin de que acabara con las protestas. En 1995, tras un juicio injusto en el que los activistas fueron acusados de participar en un asesinato, los “Nueve activistas de Ogoni” fueron ahorcados. En respuesta a lo que ocurrió, cuatro de las mujeres viudas han acudido a diversas jurisdicciones reclamando justicia, acusando a la empresa Shell de complicidad en el asesinato de sus maridos⁴².

El asunto *Kiobel v. Shell* se introdujo en la jurisdicción norteamericana en virtud del ya mencionado ATCA. Si bien esta norma ya había amparado casos similares con anterioridad, cuando el pleito llegó al Tribunal Supremo en 2013, este sostuvo que, por regla general, el ATCA no debe aplicarse a cualquier abuso de los DDHH cometido fuera del territorio estadounidense. En su lugar, la aplicación del ATCA debe supeditarse al denominado *Touch and Concern Test*, en virtud del cual los tribunales americanos tienen competencia para conocer aquellos casos que “toquen” y “conciernan” al territorio del foro (EE.UU) con suficiente fuerza o conexidad⁴³. Es más, aquel giro jurisprudencial de

⁴² Amnistía Internacional, *On Trial: Shell in Nigeria. Legal actions against the oil multinational*, London, 2020.

⁴³ *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. et al.*, Tribunal Supremo de los Estados Unidos, No. 10-1491, 133 S. Ct. 1659 (2013). Para más información nos remitimos a la abundante doctrina existente en torno a este asunto y a la bibliografía que allí se expone: MARULLO, M. C. Y ZAMORA CABOT, F.J., “El Alien Tort Statute y las consecuencias del caso *Kiobel* en los litigios transnacionales sobre empresas y derechos”, en CHIARA MARULLO, M. Y ZAMORA CABOT, F.J. (Eds.), *Empresas y Derechos Humanos...*, op. cit., págs. 225 y ss.; CLEVELAND, S.H., “After *Kiobel*”, en *Journal of International Criminal Justice*, núm. 12, 2014, págs. 551-577 (doi:10.1093/jicj/mqu037); MARTÍN-ORTEGA, O. *Empresas multinacionales y derechos humanos en derecho internacional*, Bosch, Barcelona, 2008, págs. 72 y ss.; SAINT DAHL, H. “The Implementation of the UN Principles on Business and Human Rights in Private International Law: US Experiences”, en ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHER, L., DE DYCKER, S. (Eds.), *Implementing the U.N. Guiding Principles...*, op. cit., 2017, págs. 63 y ss.; CROSER, M., DAY, M., VAN HUIJSTEE, M. & SAMKALDEN, C., “*Vedanta v Lungowe* and *Kiobel v Shell*: The Implications for Parent Company Accountability”, *Business and Human Rights Journal*, núm. 5(1), págs. 130-136, (doi:10.1017/bhj.2019.25).

carácter restrictivo y desfavorable para las víctimas se reafirmó seguidamente en el asunto *Daimler v. Bauman*⁴⁴.

3. Trabajadores

3.1 Caso Rana Plaza

El 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza, situado en Dacca (Bangladesh), sufrió un trágico derrumbamiento que dejó una cifra de 1129 trabajadores fallecidos. Aquel edificio, originalmente diseñado para ser un centro comercial, albergaba en realidad diversas fábricas textiles que operaban al servicio de marcas tan reconocidas como El Corte Inglés, Benetton, Primark, Walmart, Inditex, etc. Si bien el dueño del complejo fue condenado por un tribunal de Dacca en 2017, las ETN detrás de esta tragedia han permanecido impunes, lavando su imagen a través de las donaciones hechas a un Fondo constituido en favor de las víctimas⁴⁵.

3.2 Caso contra KiK

El almacenaje de ropa en lugares inflamables o no disponer de suficientes salidas de emergencia, son algunas de las causas que explican la muerte de 260 trabajadores y más de 30 heridos tras el incendio en 2012 de la fábrica textil *Ali Enterprise en Karachi* (Paquistán). Alrededor de un 70% de la producción de esta fábrica había sido adquirida un año atrás por la textil alemana KiK. La responsabilidad de la transnacional, sin embargo, se limitó a su voluntad de indemnizar a las víctimas en 1 millón de dólares, pero nunca ha admitido responsabilidad alguna con relación a las nefastas condiciones de seguridad del edificio incendiado. Consecuentemente, en 2015, las víctimas ejercitaron sus derechos frente al tribunal alemán de Dortmund⁴⁶.

⁴⁴ *Daimler AG v. Bauman et al.*, Tribunal Supremo de los Estados Unidos, No. 11-965, 571 US (2014). En 2004, veinte argentinos demandaron a la empresa cabecera DaimlerChrysler AG por la supuesta colaboración de su filial Mercedes-Benz Argentina en delitos de tortura, detención y muerte de algunos empleados durante la Guerra Sucia. En 2014, el Tribunal Supremo introdujo un requisito más restrictivo para inadmitir su competencia jurisdiccional en este caso. Sostuvo que las empresas únicamente podrían ser juzgadas allí donde se sintieran “*essentially at home*”, para lo cual habría que atender al lugar donde se constituyeron o al lugar donde mantienen su sede principal.

⁴⁵ GUAMÁN HERNÁNDEZ, A. Y MORENO GONZÁLEZ, G. *Empresas transnacionales y derechos humanos: la necesidad de un instrumento vinculante...*, op. cit., págs. 19 y 38. Vid. también: <https://ranaplaza-arrangement.org/>

⁴⁶ LAHIDJI, K. y BERNARD, A. Y OTROS, *Corporate Accountability for Human Rights Abuses A Guide for Victims and NGOs on Recourse Mechanisms*, FIDH, 3rd edition, 2016, pág. 573.

IV. OBSTÁCULOS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA

Tal y como se percibe de los casos estudiados, muchos de los obstáculos que impiden el acceso a recursos judiciales efectivos son el resultado de “frecuentes desequilibrios entre las partes” (Principio Rector 26). Por ello, en esta sección tratamos de identificar y describir algunas de las barreras más habituales según su naturaleza fáctica, financiera o jurídico-procesal.

1. Obstáculos fácticos y financieros

1.1 Obstáculos fácticos

Resulta inevitable detenernos a analizar la naturaleza de las ETN en tanto que la misma constituye ya un primer obstáculo de acceso a la justicia.

Antes, y obviando la abundante doctrina en torno a los términos *transnacional* y *multinacional*, conviene señalar que en el presente trabajo nos inclinamos por el empleo del primero de ellos (*transnacional*), por entender que este concepto engloba a toda aquella empresa que, con independencia de su tamaño o dimensión, realiza su actividad económica en diferentes países (de forma transfronteriza) y, por tanto, es susceptible de incurrir en vulneraciones de DDHH en el ámbito internacional⁴⁷.

En efecto, la evolución del modelo de empresa capitalista, con su máxima de obtener beneficios minimizando costes, ha conducido a que la división de la producción tenga lugar, no ya solo en distintas plantas o centros de trabajo, sino incluso en diferentes países. Fenómeno que se ha conocido bajo el concepto de deslocalización. Además, históricamente, este fenómeno se ha producido en dirección Norte-Sur, con un desplazamiento de las empresas hacia países en vías de desarrollo o subdesarrollados, ricos en recursos explotables. Pero también esta dinámica se ha dado en dirección Norte-

⁴⁷ Nótese que el concepto de “multinacional” podría llevar a pensar en una única gran empresa, con una nacionalidad, mientras que estamos ante grupos de sociedades transnacionales, “jurídicamente independientes, pues cada sociedad posee personalidad jurídica propia con arreglo a su propia Ley estatal reguladora, determinada de modo independiente, ‘sociedad por sociedad’”. Y ello con independencia de que el grupo de sociedades actúe en el mercado con la “lógica de una sola empresa”. CALVO CARAVACA, A.L., CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional privado*, vol. II, edición 16ª, Editorial Comares, Granada, 2016, pág. 802.

Norte, dentro del conocido como *dumping* de los derechos humanos⁴⁸. Así las cosas, las ETN se han convertido en grandes actores internacionales y, como tales, su impacto se ha visto reflejado en la esfera global.

Consecuencia de lo anterior, en materia de ETN y DDHH, hablamos de empresa *matriz* o *de origen* para designar a la entidad que tiene su sede en el país desarrollado donde se originó el grupo y, de esta forma, diferenciarla del resto de sus empresas asociadas que operan en terceros países dependiendo de ella de alguna manera. Precisamente, siguiendo a R. Mares, podemos distinguir hasta tres formas de estructurar la organización de sociedades descentralizadas. En primer lugar, la forma unitaria (U) se corresponde con la estructura piramidal de organización donde la empresa matriz ejerce un control rígido sobre las distintas capas de empresas filiales; en segundo lugar, se encuentra la forma multidivisional (M), donde cada división tiene más o menos autonomía y permite una mayor rentabilidad y expansión; y, en tercer lugar, las cadenas de valor mundiales (CVM), esto es, la subcontratación de la producción y distribución a empresas independientes⁴⁹.

Una extrema descentralización de las ETN, ya sea a través de relaciones contractuales o de propiedad, contribuye a diluir la responsabilidad legal de la empresa matriz por la incorrecta actuación de sus empresas filiales. Así, en la práctica, mientras que la empresa de origen se encarga de cuestiones de tipo organizativo, estratégicas o de logística, es en la actividad económica de las empresas filiales y subcontratadas – normalmente entidades más pequeñas y ubicadas en zonas periféricas de terceros países – donde se concentran los mayores riesgos de cometer vulneraciones de DDHH y ambientales. Este fenómeno, directamente ligado a la globalización y a una nueva *lex mercatoria*, ha sido denominado por algunos autores como “arquitectura jurídica de la impunidad”⁵⁰.

⁴⁸ “Podemos definir el *dumping* de derechos humanos como aquella estrategia empresarial que persigue ubicar su producción, mediante estrategias diversas de descentralización y desterritorialización, en los lugares con estructuras de protección de los derechos humanos más reducidos, ya sean marcos normativos o jurisdiccionales, presencia sindical, convenios colectivos, etc., como vía para aumentar los beneficios de la entidad matriz”. GUAMÁN HERNÁNDEZ, A. Y MORENO GONZÁLEZ, G. *Empresas transnacionales y derechos humanos: la necesidad de un instrumento vinculante...*, op. cit., pág. 47.

⁴⁹ MARES, R. “Liability within corporate groups: parent companies’ accountability for subsidiary human rights abuses”, en DEVA, S. Y BIRCHALL, D. (Eds.), *Research Handbook...*, op. cit., pág. 451.

⁵⁰ HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J., GONZALEZ, E. Y RAMIRO, P., “Las empresas transnacionales y la arquitectura jurídica de la impunidad: responsabilidad social corporativa, *lex mercatoria* y derechos humanos”, en *Revista de economía crítica*, núm. 28, 2019, págs. 41-54.

Y es que, en virtud de esta estructura, las ETN quedan sometidas a diferentes regímenes legales y tienden a aprovechar los desfases o lagunas existentes entre ellos. A mayor abundamiento, la mayoría de los ordenamientos jurídicos comparados se rigen por un principio del derecho mercantil que limita notoriamente la responsabilidad de la empresa matriz por posibles actividades ilícitas de las empresas filiales. Se trata del principio de separación de personalidad, en virtud del cual la empresa que posea acciones en otra empresa no será considerada en general legalmente responsable de los actos y omisiones de esa filial por el mero hecho de la participación que les une⁵¹.

Frente a este principio de separación jurídica de las sociedades internacionales, la doctrina del levantamiento del velo se ha erigido como la gran excepción oponible. De esta forma, la técnica jurídica del “levantamiento del velo” permite a los tribunales “penetrar en el hermetismo societario [y] descorrer el velo de las personas jurídicas, para evitar que se produzca el resultado contrario a Derecho, en los casos en que la estructura corporativa es una *mere façade*, esto es cuando se interpone la forma societaria para eludir la ley o cometer el fraude”⁵².

Si bien esta doctrina es de aplicación más bien excepcional, algunas iniciativas del *soft law*, como las relativas a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), han comenzado a incluir el término de *cadena de suministro* en sus disposiciones. El objetivo de esta inclusión es ampliar la responsabilidad hacia las entidades que integran las cadenas mundiales. Y en este sentido, resulta fundamental definir adecuadamente qué se entiende por *cadena de suministro o valor*, a fin de establecer si la responsabilidad alcanza a las cadenas de suministro, o también de producción y/o de distribución⁵³.

Un avance más que significativo en esta dirección ha venido representado por la aprobación en 2017 de la nueva Ley Francesa que, con carácter vinculante, establece la obligación del *deber de diligencia* para las empresas matrices y subsidiarias a lo largo de la cadena de suministro⁵⁴. La Ley de Transparencia de las Cadenas de Suministro de

⁵¹ MARES, R. “Liability within corporate groups: parent companies’ accountability for subsidiary human rights abuses”, en DEVA, S. Y BIRCHALL, D. (Edit). *Research Handbook...*, op. cit., págs. 451 y ss.

⁵² SEAONE, J.L. “El levantamiento del velo como mecanismo impeditivo de la elusión de la Responsabilidad Civil”, en *Revista de responsabilidad civil y seguro*, núm. 42, 2012, pág. 11

⁵³ Los Principios Rectores de la ONU, por ejemplo, se inclinan por el empleo del término de *cadena de valor*. HELMINEN, S., ALENIUS, J., WALTA, V., Y DONNER, S. *Judicial Analysis...*, op. cit., pág. 70.

⁵⁴ Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, Journal Officiel De La République Française. Y VIVAS TESÓN, I. “La responsabilidad civil en los reglamentos de la Unión Europea en relación con la actividad de las empresas”, en MÁRQUEZ CARRASCO, C. Y VIVAS TESÓN, I. *La Implementación de los Principios Rectores...*, op. cit., pág. 135.

California que, entró en vigor en 2012, o la Modern Slavery Act de Reino Unido, de 2015, son ejemplos más antiguos de legislación sobre responsabilidad corporativa⁵⁵.

Y es que acreditar que la empresa cabecera del grupo ostenta un *deber de diligencia* con respecto a las actuaciones de sus filiales, se ha convertido en una cuestión clave en el acceso a la justicia por parte de las víctimas. De hecho, en determinados casos, el deber de diligencia de la empresa matriz actúa como una vía para que los tribunales acepten su competencia judicial internacional, condición necesaria para enjuiciar las vulneraciones de DDHH cometidas por ETN en terceros Estados.

Evidentemente, la compleja arquitectura mercantil descrita hasta ahora no es casual, sino que responde a una estrategia de expansión y crecimiento económico. La libertad de movimiento del capital ha tenido como consecuencia que éste se ubique en lugares donde la normativa es más flexible y permisiva. A su vez, ello ha dado lugar a una dinámica competitiva entre países receptores de la inversión extranjera, que ha tomado el nombre de *carrera a la baja* (del inglés *race to the bottom*), en virtud de la cual, la atracción de empresas extranjeras ha ido emparejada a una reducción persistente de los estándares normativos y protectores de derechos⁵⁶.

Por consiguiente, la empedernida búsqueda de reducción de costes ha traído un inexorable detrimento de los derechos laborales y sociales en los países receptores de capital. Y en este sentido, los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscritos entre Estados, ofrecen buena prueba de cómo la captura corporativa (influencia de poderes económicos sobre poderes de decisión) se ha visto materializada en instrumentos de aparente soporte legal⁵⁷. Concretamente, los TBI han permitido a las partes (Estados receptores e inversores extranjeros) someter sus diferencias a Tribunales de arbitraje, formados por árbitros privados. Hablamos de los mecanismos de resolución de controversias Inversor-Estado (ISDS) que, en última instancia, se han visto como

⁵⁵ California Civil Code section 1714.43, The California Transparency in Supply Chains Act of 2010 y Modern Slavery Act 2015 (2015 c.30).

⁵⁶ GUAMÁN HERNÁNDEZ, A. Y MORENO GONZÁLEZ, G. *Empresas transnacionales y derechos humanos: la necesidad de un instrumento vinculante...*, op. cit., pág.48.

⁵⁷ En España y otros países hispanohablantes, los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) se conocen también bajo las siglas APPRI, relativas a Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

mecanismos de elusión de la vía jurisdiccional, integrada por auténticos jueces independientes⁵⁸.

Tanto es así, que la propia Comisión Europea, en relación con los mecanismos ISDS, manifestó “la falta, total o en parte, de legitimidad, coherencia y transparencia, así como la ausencia de posibilidad de control”⁵⁹. En consecuencia, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ha puesto en marcha un Grupo de Trabajo para reformar el sistema de resolución de controversias ISDS y trabajar en un posible Tribunal Multilateral que solvete los problemas suscitados hasta el momento por este tipo de arbitraje internacional⁶⁰.

Como ejemplo real de esta problemática presentamos el caso *Veolia vs. Egipto*. En el año 2000, el Gobierno de Alejandría suscribió un contrato con la empresa francesa Veolia Environment S.A para que prestara servicios de gestión de residuos durante los siguientes 15 años. En el año 2012, sin embargo, la empresa Veolia utilizó el TBI suscrito entre Francia y Egipto para demandar al Gobierno de Alejandría ante un tribunal de arbitraje de tipo ISDS. Concretamente, Veolia reclamó una compensación de 175 millones de euros por el supuesto incumplimiento contractual por parte del Gobierno, el cual, al haber aprobado una ley que aumentaba el salario mínimo de los trabajadores, habría incurrido en el incumplimiento del contrato suscrito con Veolia años atrás. Afortunadamente, en 2018, el Tribunal de Arbitraje se pronunció a favor del Estado de Egipto⁶¹.

También, en este punto, podemos recordar el caso de *Chevron-Texaco* ya que, en agosto de 2018, y de forma paralela a la vía jurisdiccional, un tribunal administrado por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en la Haya, determinó que la República de Ecuador había violado las obligaciones contenidas en el Artículo II(3)(c) del TBI suscrito entre EE.UU y Ecuador. Según el Laudo Parcial, la consecuencia de incumplir el TBI

⁵⁸ EBERHARDT, P., REDLIN, B. Y TOUBEAU, C. *La democracia en venta. Cómo las normas de protección de los inversores en el CETA amenazan al interés público en Canadá y la UE*. Policy, 2014, pág. 4.

⁵⁹ COM/2017/0493 final, Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un Convenio relativo al establecimiento de un tribunal multilateral para la solución de diferencias en materia de inversiones Comisión Europea, 13 de septiembre de 2017. Recuperado de: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2017%3A493%3AFIN>

⁶⁰ BERNASCONI-OSTERWALDER, N. Y JOHNSON, L. “Qué esperar de la Sesión de enero de 2020 del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI sobre la Reforma de la ISDS”, en *Investment Treaty News*, 17 de diciembre de 2019, recuperado de: <https://www.iisd.org/itn/>.

⁶¹ *Veolia v. Egypt*. *Veolia Propreté v. Arab Republic of Egypt* (ICSID Case No. ARB/12/15). Recuperado de: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/458/veolia-v-egypt>

sería la inaplicación, en cualquier Estado, de la Sentencia recaída en 2011 en favor de las víctimas ecuatorianas (sentencia que, recordamos, condenaba a Chevron al pago de 9,5 billones de dólares).

El Instituto Transnacional de Arbitraje, por su parte, ha criticado esta resolución arbitral. Según el ITA, al interpelar al resto de tribunales nacionales para que no reconocieran la Sentencia de Ecuador de 2011, el Tribunal de la Haya incurrió en un exceso de las competencias atribuidas a los mecanismos ISDS. Más Concretamente, el ITA ha considerado que aquel Laudo Parcial es “símbolo de la extensión del poder, que se ha convertido en un problema en el arbitraje de los TBI”⁶². Muy a pesar de estas consideraciones, con fecha 16 de septiembre de 2020, la Corte del Distrito Judicial de la Haya ha denegado la solicitud de Ecuador de anular el Laudo Arbitral de 2018, confirmando así su contenido⁶³.

Con todo lo expuesto, la compleja arquitectura jurídica construida en torno a las ETN se presenta como un innegable obstáculo en el acceso a la justicia por parte de las víctimas. En síntesis, la ubicación en lugares de nula o escasa protección normativa, unido a figuras como el principio de separación de personalidades jurídicas, los Tratados Bilaterales de Inversión o los mecanismos de resolución de controversias de tipo ISDS, colocan a las ETN en una situación de notable impunidad por los abusos cometidos contra las personas y el medio ambiente.

1.2 Obstáculos financieros

La cuestión económico-financiera se presenta también como un obstáculo difícilmente franqueable por parte de las víctimas, pues éstas en general, son personas con escasos recursos. Y es que, litigar en materia de derechos y empresas conlleva unos costes realmente desmedidos que disuaden a las víctimas de ejercitar acciones legales contra las empresas perpetradoras de abusos contra los DDHH.

Muchos de los datos relativos a procedimientos concretos permanecen confidenciales. Y dado que las sentencias recaídas en esta materia brillan por su ausencia, son los pactos extrajudiciales los que arrojan luz sobre las estrepitosas cuantías que están

⁶² GUZMÁN-DÍAZ, L. “To domestic courts worldwide: here is why you can disregard the August 2018 Partial Award from The Hague, Netherlands in Chevron-Ecuador Litigation”, en *The Journal of the Institute for Transnational Arbitration*, Vol. 2, Issue 1, 2020, págs. 56 y ss.

⁶³ Agencia EFE, “La Corte de la Haya niega pedido de Ecuador para negar el laudo a favor de Chevron”, 17 de septiembre de 2020. Recuperado de: <https://www.efe.com/efe/america/economia/>.

en juego. Algunos ejemplos ilustrativos son los siguientes: en lo relativo al grupo de sociedades de Shell, en 2009, la empresa se vio forzada a pagar 13,5 millones de dólares a la familia Saro-Wiwa para evitar que siguiera adelante el proceso judicial en el que se reclamaba su responsabilidad por la tortura y ejecución de activistas nigerianos⁶⁴; igualmente en 2015, la transnacional aceptó pagar 55 millones de libras a la comunidad afectada de Bodo⁶⁵; la textil Kik, por su parte, inmediatamente después del incendio de la fábrica de Ali Enterprise en 2012, indemnizó con casi 1 millón de dólares a las víctimas y, posteriormente, debido a la presión de no haber sido condenada judicialmente, admitió pagar una cuantía adicional de 5,15 millones de dólares en 2015⁶⁶; dos años más tarde de la catástrofe del edificio Rana Plaza, el Fondo fiduciario de donantes para apoyar a las víctimas había recaudado más de 30 millones de dólares con importantes contribuciones de marcas internacionales de ropa como Benetton, Inditex, Brac USA, Auchan y más⁶⁷. Finalmente, los procedimientos arbitrales no han dejado cifras muy dispares, puesto que la OCDE señalaba en 2012 que el coste medio de los procedimientos de tipo ISDS, rondaba aproximadamente los 8 y 10 millones de dólares⁶⁸.

Detrás de estas cifras exorbitantes subyacen varias razones. En primer lugar, puede apuntarse a la excesiva duración de los procesos judiciales. En la práctica, transcurren varios años desde que las víctimas interponen la demanda hasta que el tribunal se pronuncia sobre cualquiera de los aspectos controvertidos (desde pronunciamientos sobre cuestiones procesales como la jurisdicción, hasta el pronunciamiento sobre el fondo del asunto). Y, aun cuando se obtiene una eventual condena, el proceso puede dilatarse en el tiempo por la falta de reconocimiento y ejecución en un tercer Estado de la sentencia recaída en el caso concreto. Por ello, es de esperar que los costes acumulados se disparen a lo largo de tan extensos procesos, tanto por su dilatación temporal, como por la dilatación espacial (en caso de que el asunto discorra por varias jurisdicciones).

⁶⁴ IRIARTE ÁNGEL, J.L. “Empresas Multinacionales y Derechos Humanos. Un análisis reciente desde la perspectiva española”, en CHIARA MARULLO, M. Y ZAMORA CABOT, F.J. (Eds.). *Empresas y Derechos Humanos...*, op. cit., pág. 111.

⁶⁵ Business and Human Rights Resource Center, “Shell pays £55 million out of court settlement to Nigerian Bodo community over oil spills, 2015 january 7, recuperado de <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news>

⁶⁶ European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR), “Kik: Paying The Price For Clothing Production In South Asia”, 2019, recuperado de https://www.ecchr.eu/en/case/kik-paying-the-price-for-clothing-production-insouth-asia/#case_case

⁶⁷ Vid. The Rana Plaza Arrangement, en <https://ranaplaza-arrangement.org/>

⁶⁸ GAUKRODGER, D. Y GORDON, K. “Investor-State Dispute Settlement. A scoping Paper for the Investment Policy Community”, en OECD, *Working Papers on International Investment*, 2012, pág. 7, recuperado de OECD Publishing: <http://dx.doi.org/10.1787/5k46b1r85j6f-en>

En segundo lugar, los costes se justifican en la propia complejidad que revisten los casos de violaciones de DDHH por parte de ETN. Como se ha podido comprobar al estudiar los obstáculos fácticos derivados de la arquitectura societaria internacional, la sola necesidad de identificar correctamente a las empresas involucradas en las violaciones de DDHH convierte los procesos judiciales en auténticas batallas probatorias. En ocasiones, el coste de los dictámenes periciales necesarios para establecer la causalidad de lo ocurrido puede superar fácilmente el valor del asunto⁶⁹.

Finalmente, las víctimas deben soportar una serie de costes varios que engrosan significativamente el monto total. Nos referimos, entre otros, a los costes de la asistencia letrada y los honorarios de abogados (son pocos los países que ofrecen ayudas y la concesión de éstas suele quedar sujeta a requisitos de nacionalidad o de insuficiencia de recursos para litigar); los costes derivados de la carga de la prueba (inspecciones del lugar donde se cometieron los daños, peritajes técnicos como análisis de toxicidad, etc.); y los costes de viaje y traducción de documentos (es habitual que las víctimas se trasladen a foros extranjeros para reclamar justicia)⁷⁰.

Esta clara desigualdad de armas entre las víctimas demandantes y las ETN demandadas, se acentúa aún más por la genérica regla procesal de que quien pierde, paga. Esto es, las víctimas deben asumir el riesgo adicional de tener que hacer frente a las costas procesales del litigio en caso de resultar perdedoras. O incluso de tener que hacer frente a un hipotético proceso posterior, si la ETN decidiera demandarles por difamación o daños a su imagen⁷¹. Por todo ello, la cuestión económica representa un obstáculo que puede ser muy difícil, sino imposible de franquear por las víctimas.

⁶⁹ FRA. European Union Agency for Fundamental Rights. Report on *Business and Human Rights - Access to Remedy*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, pág. 74.

⁷⁰ VIVAS TESÓN, I. “La responsabilidad civil en los reglamentos de la Unión Europea en relación con la actividad de las empresas”, en MÁRQUEZ CARRASCO, C. Y VIVAS TESÓN, I. *La Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos por la Unión Europea y sus Estados Miembros*. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 131 y 132.

⁷¹ En el informe de la Agencia Europea de DDHH de 2020, un entrevistado que representa a una ONG francesa ofrece un claro ejemplo de esta cuestión. Señala que, a raíz de una denuncia contra una empresa multinacional por trabajo forzoso, la empresa inició inmediatamente un procedimiento por difamación y violación de la presunción de inocencia, reclamando a la ONG una indemnización de varios cientos de miles de euros. FRA. European Union Agency for Fundamental Rights. Report on *Business and Human Rights - Access to Remedy*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, pág. 40.

2. Obstáculos jurídico-procesales

Desde la perspectiva puramente legal, las víctimas han de enfrentarse a numerosas barreras jurídico-procesales. Entre otras podemos señalar la falta de mecanismos de acciones colectivas (*class actions*), la cuestión de la legitimación activa (en relación con ONGs, grupos de afectados) y pasiva (empresas matrices, subsidiarias o subcontratadas), la litispendencia internacional (que dos o más tribunales estén conociendo del mismo asunto), la obtención del material probatorio, los plazos de prescripción de las acciones, y un largo etcétera de cuestiones. Por su relevancia, interesa detenerse en la falta de mecanismos de acción colectiva y, especialmente, en el difícil acceso a la información en la fase probatoria.

El acceso a la justicia se ha tornado en un derecho desigual para los ciudadanos, principalmente, debido a la heterogeneidad normativa en materia de acciones colectivas. Dentro de la Unión Europea, por ejemplo, son pocos los casos que han utilizado este tipo de procedimientos porque los mismos están pensados para casuísticas muy específicas. En este sentido, los avances más significativos han tenido lugar en relación con los derechos de los consumidores y usuarios y en relación con los derechos medioambientales⁷².

Además, pese a que las violaciones de ETN involucran a una multitud de afectados, las defensas de éstos encuentran grandes dificultades a la hora de recurrir a mecanismos clásicos del derecho como los litisconsorcios pasivos, la intervención procesal o la acumulación de acciones. Por tanto, disponer de herramientas de acciones colectivas supondría una cuestión “clave” para la obtención de la tutela judicial efectiva, al tiempo que permitiría “una mayor economía procesal” así como una “mayor visibilidad social y jurídica del daño”⁷³.

Así las cosas, los damnificados por la actividad empresarial se ven forzados a acudir a acciones de responsabilidad extracontractual o de reclamación de daños y perjuicios, con la esperanza de obtener al menos un resarcimiento de índole económica. No obstante, en el derecho comparado, la mayoría de los ordenamientos civiles se rigen

⁷² FRA. European Union Agency for Fundamental Rights. Report on *Business and Human Rights - Access to Remedy*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, pág. 64.

⁷³ GARCÍA ÁLVAREZ, L. “Las acciones colectivas en los litigios internacionales por daños ambientales”, en *Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)*, núm. 30, 2015, pág. 4. (doi: 10.17103/reei.30.07)

por el denominado principio dispositivo y de aportación de parte, lo cual, a efectos procesales, implica que la carga probatoria recae sobre las víctimas, acentuando la asimetría en las partes y el desequilibrio de poderes existente entre ellas⁷⁴.

De forma que, para que prospere la demanda civil por las vulneraciones padecidas, las víctimas no solo deben acreditar la existencia de una actividad empresarial o la existencia de un daño, sino especialmente, la relación de causalidad entre la primera y la segunda. Es en este punto donde aparece uno de los mayores obstáculos procesales: el acceso a la información. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la prueba se encuentra en manos de las empresas, esto es, en lugares completamente inaccesibles a las víctimas. Concretamente, la información probatoria puede encontrarse en cartas, informes, correos electrónicos...donde se evidencia la responsabilidad (o la *diligencia debida*) que ostentaba la empresa matriz con respecto a las actuaciones de las empresas filiales⁷⁵.

Es por ello por lo que el acceso a la información se ha considerado como un “derecho de entrada” en el derecho internacional de los DDHH ya que, sin el acceso a la información pertinente, otros muchos derechos quedan lejos de ser alcanzados⁷⁶. Piénsese, por ejemplo, en lo improbable que resulta emprender acciones legales cuando las víctimas no disponen ni siquiera de la información relativa a sus posibilidades legales (casos de pueblos indígenas). O piénsese, también, en la necesidad de acreditar que una empresa empleó sustancias nocivas para los trabajadores y el medioambiente sin implementar las debidas medidas de seguridad.

En este sentido, merece señalar la catástrofe de Bhopal (India), acontecida en 1984. Entonces, una fábrica sufrió una fuga de isocianato metilo que, tres décadas después, ha dejado un balance de 25.000 muertos y más de medio millón de pacientes con graves enfermedades. Se estima que muchas de las muertes posteriores a la catástrofe, se ocasionaron *innecesariamente* por la deliberada y continua política de la empresa Union

⁷⁴ “In tort law, the burden of proof lies primarily with the injured party, which should, among other things, be able to prove that the company has acted in a negligent manner.” En HELMINEN, S., ALENIUS, J., WALTA, V., Y DONNER, S. *Judicial Analysis...*, *op. cit.*, pág. 87.

⁷⁵ FRA. European Union Agency for Fundamental Rights. Report on *Business and Human Rights - Access to Remedy*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, pág. 62.

⁷⁶ JÄGERS, N. “Access to effective remedy: the role of information”, en DEVA, S. Y BIRCHALL, D. (Eds). *Research Handbook...*, *op. cit.*, págs. 403 y ss.

Carbide de negar información a las autoridades sanitarias indias sobre las propiedades tóxicas de los agentes químicos liberados⁷⁷.

Otro ejemplo de la relevancia del acceso a la información lo encontramos en los asuntos contra la petrolera Shell. En 2011, por ejemplo, el Tribunal de primera instancia de la Haya rechazó una solicitud de las víctimas para que se divulgaran unos documentos que se encontraban en posesión exclusiva de la empresa. Dado que la legislación holandesa no obligaba a Shell a revelar ninguna información relativa a la cuestión litigiosa, la defensa de las víctimas nigerianas tuvo que recurrir a documentos y publicaciones de carácter público. Contrariamente, en 2015, el Tribunal de Apelación anuló la decisión del tribunal inferior y ordenó a Shell que proporcionara a los demandantes el acceso a los documentos relacionados con el derrame del petróleo⁷⁸.

Por casos como estos, las organizaciones de la sociedad civil y buena parte de la doctrina académica, abogan por una revisión de la legislación y sostienen que la carga de la prueba debería invertirse, debiendo ser asumida por las empresas demandadas⁷⁹. Al menos de esta forma, las empresas asumirían la carga de probar la ausencia de un comportamiento negligente. Aunque esta petición no se ha visto satisfecha por el momento⁸⁰, algunos países han modificado ya sus normativas para obligar a las empresas a publicar documentos controvertidos que tengan un carácter esencial para el proceso. Es el caso de la Ley italiana de 12 de abril de 2019⁸¹, por la que se amplía el ámbito de aplicación de las demandas colectivas; o, el caso de la ya mencionada Ley francesa de 2017, sobre la diligencia debida.

⁷⁷ ESTEVE-MOLTÓ, J.E., “La estrecha interdependencia entre la criminalidad de las empresas transnacionales y las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y del medio ambiente: lecciones del caso Bhopal.”, en *Revista Electrónica de Estudios Internacionales (REEI)*, núm. 32, 2016, pág. 7. (doi: 10.17103/reei.32.01)

⁷⁸ “Dutch appeals court says Shell may be held liable for oil spills in Nigeria”, 18 de diciembre de 2015, en *The Guardian*, recuperado de <https://www.theguardian.com/global-development/2015>; y A.F. Akpan v. Royal Dutch Shell, plc, recuperado de <https://elaw.org/af-akpan-v-royal-dutch-shell-plc-0>

⁷⁹ El objetivo de la distribución de la carga de la prueba debería ser “lograr establecer un justo equilibrio entre las consideraciones sobre el acceso a la justicia, por un lado, y las de equidad para todas las partes, por otro”. ONU, A/HRC/32/19, *Mejorar la rendición de cuentas y el acceso a las reparaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales*, 10 de mayo 2017, Objetivo 12.5, pág. 20.

⁸⁰ Los Principios Rectores núm. 3 y 26 reconocen el acceso a la información como una de las barreras a las que deben hacer frente las víctimas y refuerzan la necesidad de que las empresas divulguen la información concerniente a su impacto en los derechos humanos, pero siempre de manera no vinculante.

⁸¹ La Ley italiana núm. 31, entró en vigor en abril de 2020. Se trata de la Legge 12 Aprile 2019, n. 31, volta a riformare l'azione di classe.

2.1 La competencia de los Tribunales del domicilio de la cabecera

Ninguno de los obstáculos jurídico-procesales tendría lugar si ni siquiera un tribunal declarase su competencia internacional para juzgar un asunto. Por ello, superar la problemática previa de la competencia judicial internacional es esencial para acceder a la justicia.

El problema se origina cuando, a lo largo de los años, las víctimas de la actividad empresarial han encontrado grandes dificultades para obtener justicia y reparación en sus propios países. Tales dificultades, a su vez, han tenido diversos orígenes, como dudosos o débiles sistemas democráticos (casos de dictaduras o gobiernos paramilitares en África y Latino América), ordenamientos jurídicos no consolidados o con una insuficiente trayectoria jurisprudencial (países asiáticos), o presiones e inestabilidades políticas que han invisibilizado a las víctimas⁸².

Así, todas estas causas han tenido una consecuencia común, y es que, las víctimas de las violaciones de DDHH provocadas por ETN se han visto obligadas a recurrir a terceros países, generalmente a los países de origen de la empresa matriz, en búsqueda de una reparación efectiva. Es entonces cuando surge la cuestión fundamental que concierne a la jurisdicción: ¿cómo se justifica la competencia judicial de un tribunal con respecto a unos hechos cometidos fuera de sus fronteras y perpetrados por personas jurídicas extranjeras? O, dicho de otra forma, ¿son los tribunales del país de la empresa cabecera competentes para juzgar los hechos cometidos por empresas filiales en el extranjero?

La complejidad de estas cuestiones se ve agravada desde el momento en que el Derecho Internacional ha contemplado la competencia internacional de los tribunales en términos territoriales. Esto es, en virtud del principio de soberanía territorial, los tribunales nacionales tienen en principio competencia para juzgar únicamente los hechos acaecidos dentro del perímetro territorial delimitado por sus fronteras⁸³. De forma que la jurisdicción internacional, como la política interestatal, ha descansado tradicionalmente en un principio de no interferencia.

⁸²ZURUAGA JARAMILLO, L.N., “Hacia la visibilización de las víctimas invisibles vinculadas a las empresas transnacionales en América Latina”, en AMBOS, K. y BÖHM, M.L (Eds.) y OTROS, *Empresas transnacionales y graves violaciones de derechos humanos en América Latina*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 229 y ss.

⁸³ ZERK, J., *Corporate Liability for Gross Human Rights Abuses...*, op. cit., pág. 48.

En cualquier caso, las respuestas a las cuestiones de competencia internacional difieren según los sistemas jurídicos⁸⁴. Así, la búsqueda de la justicia en países de occidente ha dado lugar al fenómeno del *forum shopping*, ya que las víctimas han tratado de localizar los foros más beneficiosos a sus pretensiones, foros o países donde la justicia se presenta más accesible⁸⁵.

En contraposición a esta idea, la globalización ha desencadenado la necesidad de unificar el Derecho internacional, al menos en el plano regional. Y esta regulación ha traído debates tan interesantes como necesarios en materia de ETN y DDHH, como la aplicación extraterritorial del derecho, o incluso la posibilidad de establecer una jurisdicción civil universal, que garantizara el acceso efectivo a la justicia a toda víctima, con independencia del lugar de la violación de sus derechos⁸⁶.

Lejos de ello, incluso la normativa internacional más reciente en esta materia ha mantenido el *deber* de los Estados de proteger respecto a las violaciones de DDHH cometidas en *su territorio y/o jurisdicción* (PR núm. 1). Por tanto, si añadimos la inexistencia de un Tratado Internacional y la ausencia de una jurisdicción internacional donde se discuta la responsabilidad de las ETN, el sistema actual *territorial* no parece responder debidamente a la realidad de la actividad económica transfronteriza.

Por ello, al comienzo del trabajo presentábamos el DIPr como una herramienta que ofrece respuestas alternativas a las barreras del sistema actual. Concretamente, esta rama del derecho se ha centrado en el estudio de tres grandes temas concernientes a la litigación internacional; (i) la jurisdicción o *forum*; (ii) el derecho aplicable o *ius*; (iii) y, el reconocimiento y ejecución de las sentencias en el ámbito internacional; de entre las cuales, delimitaremos el presente trabajo a la problemática de la jurisdicción y, concretamente, la regulación que ha recibido desde la perspectiva europea.

⁸⁴ IRIARTE ÁNGEL, J.L. “Empresas Multinacionales y Derechos Humanos. Un análisis reciente desde la perspectiva española”, en MARULLO, M. C. Y ZAMORA CABOT, F.J. (Eds.). *Empresas y Derechos Humanos...*, *op. cit.*, pág. 112.

⁸⁵ GARCÍA ÁLVAREZ, L. “Las acciones colectivas en los litigios internacionales por daños ambientales”, en *Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)*, núm. 30, 2015, págs 11-12.

⁸⁶ BONET PÉREZ, J. “Aproximación jurídica internacional al ejercicio de la jurisdicción civil universal frente a violaciones graves de derechos humanos”, *Deusto Journal of Human Rights*, núm. 5, 2020, págs. 13-40.

V. LA EVENTUAL SOLUCIÓN EUROPEA EN CUANTO AL ACCESO A LA JUSTICIA

1. La competencia judicial internacional en el Reglamento Bruselas I bis.

En el ámbito de la Unión Europea, la competencia judicial internacional en el ámbito civil y mercantil está parcialmente armonizada a través del Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, también denominado Reglamento Bruselas I bis, por tratarse de la actualización del texto anterior, denominado Reglamento Bruselas I⁸⁷.

Con independencia de la nacionalidad de las partes (víctimas y ETN), cuando asuntos de esta materia son planteados frente a un tribunal de algún Estado Miembro (EM) de la UE, la regla general aplicable a fin de determinar la competencia jurisdiccional del tribunal es, en primer lugar, evaluar los hechos con remisión a las normas del mencionado Reglamento Bruselas I bis; y, si este resulta inaplicable, acudir secundariamente a las normas de jurisdicción internacional, también denominadas de *jurisdicción residual*, contenidas en el derecho interno de los EEMM⁸⁸.

Precisamente, esta regla general es la que se deriva del artículo 4 del Reglamento Bruselas I bis, el cual condiciona la aplicación de su articulado (salvo en un puñado de excepciones) al hecho de que las personas demandadas (en este caso, las empresas) estén domiciliadas en un EM de la Unión. Por tanto, cuando las víctimas actúen contra una empresa europea, la competencia jurisdiccional de los tribunales quedará garantizada en virtud del *foro* del domicilio recogido en el artículo 4. Ahora bien, la consecuencia lógica de ello consiste en acudir al artículo 63 del Reglamento, a fin de conocer cuándo una empresa se considera domiciliada en la UE a efectos del Reglamento. Así, esta disposición señala que, una sociedad o persona jurídica se considera domiciliada en el lugar donde se encuentre bien su sede estatutaria, o bien su administración central, o bien su centro de actividad principal.

⁸⁷ Reglamento de la Unión Europea núm. 1215/2012, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOUE L n.º 351, de 12 de diciembre de 2012). ÁLVAREZ RUBIO, J.J. Y YIANNIBAS, K (Eds). *Human Rights in Business. Removal of Barriers...*, *op. cit.*, pág. 27

⁸⁸ VAN DEN EECKHOUT, V. "The Private International Law Dimension of the Principles in Europe", en ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHALER, L., DE DYCKER, S. (Eds), *Implementing the U.N. Guiding Principles...*, *op. cit.*, pág. 41

Por tanto, en Europa, la vía más sencilla para establecer la competencia internacional de los tribunales en materia de DDHH y ETN, resulta del mero hecho de que la empresa demandada tenga su sede en uno de los EEMM. Además, esta competencia se ve reforzada por la imposibilidad de aplicar la doctrina del *forum non conveniens* bajo el derecho europeo (es jurisprudencia del TJUE que encontramos, entre otros, en el asunto *Owusu* de 1 de marzo de 2015, C-281/02)⁸⁹. Es decir, que las víctimas no pueden ser derivadas a un foro distinto del domicilio del demandado “bajo el pretexto de que los hechos ocurrieron en otro lugar y, por tanto, aquel sería el más conveniente para conocer del asunto”⁹⁰.

En todo caso, unida a la regla general del artículo 4, el Reglamento Bruselas I bis contiene igualmente una serie de reglas especiales que pudieran ser aplicables en el ámbito que nos ocupa. Entre ellas, el párrafo 3 del artículo 7 ofrece la posibilidad de que un tribunal competente en materia penal pueda asimismo conocer de la acción civil que se fundamente en los mismos hechos. Así, podrá ejercitarse una acción de reclamación de daños y perjuicios, o una acción de restitución, bajo la ya admitida jurisdicción del tribunal por la vía de lo penal.

Del mismo modo, el párrafo 2 del art. 7 se presenta como una opción posible en la materia que nos ocupa. Concretamente, esta disposición ofrece al demandante un foro alternativo a la regla general del art. 4. De forma que, en materia delictual o cuasidelictual, es posible demandar a una empresa europea en un Estado distinto al de su domicilio, si ese otro EM constituye el lugar *donde se ha producido o puede producirse el hecho dañoso*. Este apartado, por tanto, otorga la posibilidad de elegir entre dos foros concretos: por un lado, el lugar donde se produce el hecho causante del daño (en jurisprudencia del

⁸⁹ “Además, aceptar la excepción de *forum non conveniens* en el marco del Convenio de Bruselas pondría en peligro la aplicación uniforme de las reglas de competencia que éste contiene, en la medida en que solamente un número limitado de Estados contratantes reconoce dicha excepción, siendo así que el objetivo del Convenio es precisamente establecer reglas comunes y excluir las reglas nacionales exorbitantes.” STJUE de 01/03/2005, en el asunto *Owusu v. Jackson* (C-281/02), ECR I-01383, Apartado 43.

⁹⁰ En el asunto Bhopal, por ejemplo, los tribunales de Nueva York utilizaron la doctrina del *forum non conveniens* para archivar la causa. GUAMÁN HERNÁNDEZ, A. Y MORENO GONZÁLEZ, G. *Empresas transnacionales y derechos humanos: la necesidad de un instrumento vinculante...*, op. cit., pág. 21; y KESSEDJIAN, C. “European Perspectives”, en ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHER, L., DE DYCKER, S. (Eds), *Implementing the U.N. Guiding Principles...*, op. cit., pág. 144.

TJUE, denominado *Handlungsort*); y, por otro lado, el lugar donde se materializa realmente el daño (denominado *Erfolgsort*)⁹¹.

En este sentido, cabe señalar que, cuando se inició el proceso de reforma del Reglamento Bruselas I, la Comisión Europea propuso un intento de *internacionalizar* el Reglamento para que el mismo fuera extensible a demandados no europeos, esto es, a empresas con domicilio en terceros Estados⁹². Sin embargo, esta propuesta cayó. Y lo que hubiera significado la aplicación extraterritorial de las normas europeas para violaciones de derechos cometidas fuera de la UE (con el consiguiente incremento de la garantía de acceder a una tutela judicial efectiva) no pasó de ser un intento⁹³. Por ello, no hay que perder de vista que, las reglas enunciadas hasta ahora solo son aplicables a empresas cuya sede se encuentre en alguno de los 27 EEMM de la UE.

Muy contrariamente, en la práctica son reiterados los casos en que, junto a la empresa matriz europea, las víctimas pretenden demandar también a empresas filiales o subcontratadas que tienen su sede fuera de la Unión. En tales casos, el propio Reglamento Bruselas I bis establece que, para que los tribunales nacionales puedan declarar su competencia respecto a las empresas filiales no europeas, deberán hacerlo con remisión a las normas contenidas en su derecho interno, pues las reglas de atribución de competencia internacional contenidas en el Reglamento únicamente se aplican a las empresas cabeceras domiciliadas en la Unión. Así, algunos de los mecanismos más comunes dentro del derecho civil interno de los EEMM que facilitan la litigación en materia de DDHH serían el *forum necessitatis*, la acumulación de acciones de los demandados o la búsqueda del resarcimiento civil en procedimientos penales⁹⁴.

⁹¹ VAN DEN EECKHOUT, V. “The Private International Law Dimension of the Principles in Europe”, en ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHALER, L., DE DYCKER, S. (Eds), *Implementing the U.N. Guiding Principles...*, op. cit., pág. 42.

⁹² KESSEDJIAN, C. “European Perspectives”, en ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHALER, L., DE DYCKER, S. (Eds), *Implementing the U.N. Guiding Principles...*, op. cit., pág. 147.

⁹³ VAN DEN EECKHOUT, V. “The Private International Law Dimension of the Principles in Europe”, en ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHALER, L., DE DYCKER, S. (Eds), *Implementing the U.N. Guiding Principles...*, op. cit., págs. 44 y ss.; y AUGENSTEIN, D. Y JÄGERS, N. “Judicial remedies: jurisdiction”, en ÁLVAREZ RUBIO, J.J. Y YIANNIBAS, K (Edit.). *Human Rights in Business. Removal of Barriers...*, op. cit., págs. 18 y ss.

⁹⁴ AUGENSTEIN, D. Y JÄGERS, N. “Judicial remedies: jurisdiction”, en ÁLVAREZ RUBIO, J.J. Y YIANNIBAS, K (Edit.). *Human Rights in Business. Removal of Barriers to Access to Justice in the European Union*. Routledge, Abingdon, 2017, pág. 28 y ss.

2. Análisis de la competencia judicial internacional en casos europeos.

A fin de obtener un mayor entendimiento de cómo se han resuelto las cuestiones de jurisdicción en casos europeos, hemos recuperado tres de los asuntos expuestos en la Sección III del presente trabajo: el caso contra Volkswagen, casos contra Shell y el caso contra KiK, uno por cada grupo de víctimas afectadas.

2.1 Caso contra Volkswagen AG

El caso de la demanda dirigida contra Volkswagen es un ejemplo útil de cómo aplicar el artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis. Recordando los hechos, nos encontramos ante un caso donde las víctimas (consumidores), la empresa (Volkswagen) y los hechos controvertidos (la compra de coches con un fraudulento sistema de detección de emisiones contaminantes), recaen en dos de los EM de la UE: Austria y Alemania.

Así, cuando la organización para la defensa de los consumidores austriacos decidió demandar a la empresa alemana en un tribunal regional de Austria, lo hizo con fundamento en el foro alternativo del art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis. En su virtud, los demandantes optaron por interponer la demanda en Austria, en el lugar donde se materializó el daño (*Erfolgsort*); y no en Alemania, lugar donde se produjo el hecho causante del daño (*Hundlungsort*), es decir, donde se incorporaron los softwares de manipulación de los gases de escape. No obstante, ante la negativa de Volkswagen de admitir la competencia de los tribunales austriacos, el tribunal regional planteó una cuestión prejudicial para conocer la correcta interpretación de este precepto del Reglamento europeo⁹⁵.

En la STJUE de 9 de julio de 2020⁹⁶, la Sala Primera concluyó que el art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis debía interpretarse en el sentido de que, cuando determinados vehículos han sido equipados ilegalmente por su fabricante en un Estado miembro (Alemania), con un software que manipula los datos relativos a las emisiones de los gases de escape antes de ser adquiridos por un tercero en otro Estado Miembro (Austria), el

⁹⁵ La cuestión prejudicial, concretamente, quiso dilucidar si Austria podía considerarse lugar de materialización del daño en vista de que éste era de naturaleza meramente económica. A este respecto, las conclusiones alcanzadas por la Abogada General M. Campos Sánchez-Bordona, emitidas el 2 de abril de 2020, fueron confirmativas. Recuperado de InfoCuria Jurisprudencia, en <http://curia.europa.eu/juris/>

⁹⁶ STJUE de 09/07/2020, *Verein für Konsumenteninformation v. Volkswagen AG*, C-343/2019, ECLI:EU:C:2020:534. Recuperado de InfoCuria Jurisprudencia, en <http://curia.europa.eu/juris/>

lugar de materialización del daño se halla en este último. Así, el asunto ha quedado pendiente de resolver en cuanto al fondo por los tribunales austriacos.

2.2 Casos contra Shell

En los casos de contaminación medioambiental de Shell, las acciones judiciales iniciadas en Europa se han dirigido conjuntamente contra la empresa matriz RDS (Royal Dutch Shell), con sede en Holanda, pero registrada en Reino Unido; y, contra su filial nigeriana SPDC (Shell Petroleum Development Company of Nigeria), con domicilio en dicho país africano.

En 2015, en el asunto de *Okpabi y otros*, las víctimas interpusieron la demanda en la jurisdicción inglesa (entonces miembro de la UE), con base en el art. 4 del Reglamento Bruselas I bis, es decir, utilizando el foro del domicilio del demandado. En lo que se refiere a la filial nigeriana, la defensa alegó una disposición del *common law* inglés, en función de la cual la filial SPDC debía ser admitida como “parte necesaria” en el proceso. Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Londres (*The High Court*) como el Tribunal de Apelación (*Court of Appeal*) resolvieron que, los tribunales ingleses no eran competentes para conocer de las reclamaciones contra RDS y SPDC⁹⁷. Y ello por cuanto las víctimas no consiguieron acreditar suficientemente la relación entre ambas sociedades, concretamente, no probaron la existencia de *un deber de cuidado* de RDS con respecto a las operaciones de su filial nigeriana. Las recientes decisiones tomadas en el asunto de otra multinacional inglesa, *Vedanta Resources Plc*, han llevado a la Corte Suprema a admitir una revisión de las decisiones en el caso contra Shell, todavía pendiente de resolver⁹⁸.

El asunto de los *Cuatro agricultores* contra Shell, por el contrario, ha transcurrido en otro sentido. En este caso, la parte demandante (apoyada por la ONG *Friends of Earth*),

⁹⁷ *Okpabi and others v Royal Dutch Shell Plc and another* [2018] EWCA Civ 191, Case No: A1/2017/0407 and 0406, Royal Courts of Justice, London, (14 February 2018). Disponible en: https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Shell_Approved_Judgment.pdf; Vid. también: ARISTOVA, E., “Okpabi v Shell in the Supreme Court: Limits of civil liability of the UK parent companies for overseas environmental pollution”, 24 junio de 2020, Ardea Internacional, recuperado de: <https://www.ardeainternational.com/thinking>

⁹⁸ *Vedanta Resources PLC v Lungowe* [2019] UKSC 20. En 2019, la *High Court* de Inglaterra admitió su competencia con respecto a la matriz inglesa *Vedanta Resources Plc* y su filial zambiana *KMC* por las relaciones de gestión y dependencia existentes dentro del grupo empresarial. Vid. CROSER, M., DAY, M., VAN HUIJSTEE, M. & SAMKALDEN, C., “Vedanta v Lungowe and Kiobel v Shell: The Implications for Parent Company Accountability”, *Business and Human Rights Journal*, núm. 5(1), págs. 130-136, (doi.10.1017/bhj.2019.25).

interpuso la demanda contra RDS en Holanda, con base en el art. 4 del Reglamento 1215/2012. Respecto al resto de sociedades demandadas y domiciliadas en Estados europeos (por ejemplo, la empresa de transporte Shell T&T, domiciliada en Londres), la parte actora alegó el foro de vinculación procesal recogido en el art. 8.1 del Reglamento Bruselas I bis⁹⁹. El Tribunal holandés, con fecha 18 de diciembre de 2015, no solo declaró su competencia frente a las empresas europeas, sino que, por primera vez en la historia, se declaró competente para conocer también de las acciones emprendidas contra la filial nigeriana SPDC¹⁰⁰. Tal admisión se fundamentó en el art. 7 del Código de Procedimiento Civil de este país, el cual permite atraer a la jurisdicción holandesa a una filial extranjera, cuando existe un vínculo suficiente entre las demandas dirigidas contra ella y contra la empresa matriz holandesa y, la competencia respecto a esta última haya sido estimada¹⁰¹. En otras palabras, cuando las acciones dirigidas contra todos los codemandados guarden una conexión suficientemente estrecha, el art. 7 de la ley holandesa permite, por razones de eficiencia procesal, que los Tribunales consideren conjuntamente todos los asuntos planteados¹⁰². De esta forma, el pasado octubre de 2020, el Tribunal de Apelaciones de La Haya escuchó los testimonios de las víctimas en un caso que ha tardado 12 años en llegar a los tribunales.

Pero la jurisdicción de los Países Bajos ha ido incluso más lejos al admitir en 2019 su competencia judicial respecto al caso de *Kiobel v. Shell*, tras el fracaso de éste en la jurisdicción estadounidense. Siguiendo la misma argumentación legal que en el caso anterior, la competencia se estableció respecto a las empresas cabeceras con base en el art. 4 del Reglamento (foro del domicilio); respecto al resto de empresas europeas con base en el art. 8 del Reglamento (vinculación procesal en litisconsorcio pasivo); y

⁹⁹ El artículo 8.1 del Reglamento dispone que: “Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada: 1) si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente”, Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012.

¹⁰⁰ Court of Appeal of The Hague (Dooh and Milieudefensie v Royal Dutch Shell and SPDC; and Dooh and Milieudefensie v Shell Petroleum N.V. and the ‘Shell’ Transport and Trading Company Ltd), ECLI:NL:GHDHA:2015:3586, 18 December 2015,

¹⁰¹ PIGRAU SOLÉ, A., ÁLVAREZ TORNÉ, M., CARDESA-SALZMANN, A. Y OTROS. *Derechos Humanos y Empresas Europeas. Un manual práctico para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos*, Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona/ Universitat Rovira i Virgili, 2016, pág. 43.

¹⁰² IRIARTE ÁNGEL, J.L. “Empresas Multinacionales y Derechos Humanos. Un análisis reciente desde la perspectiva española”, en MARULLO, M. C. Y ZAMORA CABOT, F.J. (Eds.). *Empresas y Derechos Humanos...*, op. cit., pág. 113. Y bibliografía allí citada.

respecto a la filial nigeriana con base en el art. 7 del Código de Procedimiento Civil holandés¹⁰³.

2.3 Caso contra KiK

Finalmente, en 2015, las víctimas del incendio de la fábrica textil de Paquistán abrieron el camino de la vía judicial para que KiK asumiera su responsabilidad con respecto a la catástrofe ocurrida en 2012. La demanda se interpuso en el tribunal alemán de Dortmund, con base en el art. 4 del Reglamento Bruselas I bis. El tribunal, por su parte, admitió su competencia jurisdiccional en 2016, concediendo además ayuda legal a las víctimas. Así, algunas de las pruebas aportadas por las víctimas denuncian la irresponsabilidad de KiK con respecto al edificio de *Ali Enterprise*, cuyas salidas de emergencia se encontraban bloqueadas y las ventanas cerradas con barrotes al tiempo de producirse el incendio. Paradójicamente, de manera previa al desastre, KiK había expresado su compromiso con el trabajo decente y había contratado auditorías para evaluar el edificio.

Años después, con la negociación propiciada por la OIT, la empresa alemana se comprometió al pago de 5,15 millones de dólares a las familias y víctimas afectadas, a pesar de lo cual, la transnacional sigue negando su responsabilidad en el incendio. Desafortunadamente, el tribunal rechazó en 2019 las pretensiones de los afectados pues, según el derecho paquistaní, el plazo para ejercitar la acción de reclamación habría prescrito para entonces¹⁰⁴.

Sirva este caso para reparar en que, superado el obstáculo de la competencia internacional, las víctimas deben enfrentarse a la problemática derivada de la ley aplicable al asunto, por no mencionar los problemas derivados del ulterior reconocimiento y ejecución de la sentencia en terceros países.

¹⁰³ Esther Kiobel v Royal Dutch Shell PLC [2019] ECLI:NL:RBDHA:2019:4233. Vid. también: VAN CALSTER, G., “Kiobel v Shell in The Netherlands. Court confirms jurisdiction anchored unto mother holding and qualifies the suit as one in human rights: not tort. Also orders limited use of documents obtained in US discovery and limited continuation of the trial.”, 17 mayo de 2019, recuperado de <https://gavclaw.com/2019/05/17/>

¹⁰⁴ Regional Court (*Landgericht*) of Dortmund, *Jabir and others v. KiK Textilien und Non-Food GmbH*, Case No. 7 O 95/15. Vid. también: Business and Human Rights Resource Centre, “Nigerian Farmers take their Oil Pollution Case to Dutch Court”, 18 de octubre de 2020, recuperado de <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/nigerian-farmers-take-their-shell-oil-pollution-case-to-dutch-court/>

VI. CONCLUSIONES

I. En el estudio de las empresas transnacionales y los derechos humanos, la conclusión que más directamente puede extraerse es, la profunda complejidad que envuelve al tema. Y tal complejidad puede sintetizarse en dos razones principales.

En primer lugar, en la gran cantidad de agentes implicados en esta problemática: Estados, ONG, activistas, víctimas de la sociedad civil y, claro está, empresas. Además, respecto a estas últimas, la dificultad se multiplica cuando se consideran todas las entidades que integran las grandes cadenas de valor mundiales: empresas matrices, empresas filiales, empresas subcontratadas, fábricas locales, compañías de distribución, etc.

En segundo lugar, la complejidad del asunto se observa en la confluencia de una pluralidad de iniciativas normativas tendentes a mitigar los impactos de la actividad empresarial. Así la heterogeneidad normativa se manifiesta tanto en el objeto de protección (en ocasiones, el comercio; en ocasiones, personas, bienes y medioambiente), en las fuentes de las que emana (*hard law o soft law*), o en el alcance de las normas (internacional, regional o nacional).

II. En cualquier caso, en el estudio de la actividad de las empresas transnacionales, el marco normativo actual parece estar gobernado por un régimen de voluntariedad. Así, a falta de obligaciones jurídicas internacionales que sometan a las empresas y les hagan responder por los abusos cometidos, el sistema deposita una excesiva confianza en el buen hacer de las grandes corporaciones, esperando que tomarán las acciones necesarias para preservar los derechos humanos en todos sus procesos económicos.

III. Por el contrario, al estudiar los obstáculos fácticos que impiden el acceso a la justicia, hemos podido comprobar que esas expectativas no se corresponden con la dinámica económica actual. Lejos de ello, las empresas siguen cometiendo violaciones de derechos humanos. Y en vista de que los intereses económicos se han introducido en los marcos normativos, pareciera que lo hacen con casi total impunidad.

Los casos de violaciones de DDHH seleccionados para este trabajo son casos muy sonados porque han conseguido recorrer gran parte del camino judicial. La regla general, sin embargo, se presenta en la gran mayoría de casos en los que las víctimas de

corporaciones no consiguen superar los obstáculos fácticos, financieros y jurídico-procesales necesarios para obtener la debida reparación.

IV. A veces, la regulación de la jurisdicción internacional en el derecho privado se ha presentado como una puerta abierta a los tribunales de los Estados de origen. Sin embargo, limitar la competencia judicial al ámbito territorial en este tipo de asuntos, de poco o nada sirve a las víctimas que sufren las violaciones de derechos humanos en países de nula protección. En este sentido, la extraterritorialidad debería abrirse paso en la regulación de una actividad económica que, efectivamente, atraviesa tierras y fronteras.

V. Afortunadamente, los intentos por extender la responsabilidad de las empresas hacia las irregularidades cometidas a lo largo de sus cadenas mundiales han crecido en los últimos años. Prueba de ello es que, Estados protagonistas de la economía-mundo han comenzado a aprobar leyes que obligan a sus empresas y amplían sus deberes de cuidado (Reino Unido, California o Francia). Y en lo relativo a las víctimas, este tipo de iniciativas legislativas se traducen en una mayor esperanza de acceder a mecanismos efectivos de reparación.

VI. De forma paralela, el ámbito internacional se ha sumido en la elaboración de un proyecto de Tratado vinculante en la materia. Así, la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos estableció un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta que, desde el 2015, camina hacia un ambicioso objetivo a cuya negociación se suman cada vez más Estados. La última reunión tuvo lugar el pasado mes de octubre, donde se presentó el segundo borrador del Tratado vinculante.

Sin embargo, como apuntamos al comienzo del trabajo, el panorama internacional se encuentra dividido entre quienes abogan por un reforzamiento de los Principios Ruggie y quienes defienden la necesidad de un Tratado internacional vinculante. Así, mientras que la primera opción permitiría un sistema de iniciativas más diversas y flexibles, que pudieran dar lugar a su vez a solución prácticas y operativas, no puede pasarse por alto que, quienes sufren esta problemática en sus propias carnes (víctimas y defensores de la sociedad civil), defienden fervorosamente el proyecto del tratado vinculante como opción definitiva para acabar con la impunidad de las empresas.

Inclinarse con rotundidad por la adopción de un Tratado Vinculante en las últimas líneas de este trabajo requeriría de una fundamentación teórica, política e incluso filosófica que escapa del ámbito de este trabajo. En cualquier caso, en vista de lo

estudiado, la problemática de ETN y DDHH exige una contundente regulación. Quizás, esta debería ser el fruto de combinar las dos grandes opciones que se barajan en la actualidad.

VII. En todo caso, el acceso a la justicia se contempla como un derecho fundamental en el derecho internacional de los derechos humanos, y se encuentra estrechamente ligado a un valor tan básico como la dignidad humana. Es más, sin el acceso a la justicia, el resto de los derechos corren el riesgo de quedar vacíos de contenido. Por todo ello, el sistema internacional debe mantenerse a la altura de su articulado. Y, especialmente, debe ofrecer cuantas herramientas sean necesarias para que la justicia se haga realidad en los casos de vulneraciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales.

VIII. Finalmente, mientras la normativa a nivel internacional no experimente mayores avances, las últimas sentencias recaídas en este tipo de asuntos colocan a la jurisdicción europea en una situación favorable a las víctimas. Así, hemos podido comprobar que, a través de las normas de competencia internacional contenidas en el Reglamento Bruselas I bis (que permiten demandar a empresas con sede en Europa) y, especialmente, a través de la remisión de este instrumento al ordenamiento jurídico interno de cada país (permitiendo en algunos casos conocer de las demandas dirigidas contra las empresas del grupo domiciliadas fuera de la Unión), los Tribunales de los Estados de la UE se han convertido en un posible foro de reparación para las víctimas de abusos perpetrados por empresas transnacionales cuando la cabecera del grupo tiene su domicilio dentro de la Unión.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Manuales, monografías y artículos:

- ÁLVAREZ RUBIO, J.J. Y YIANNIBAS, K (Eds.). *Human Rights in Business. Removal of Barriers to Access to Justice in the European Union*. Routledge, Abingdon, 2017.
- AMBOS, K. y BÖHM, M.L (Eds.), URQUIZO, G. (Coord.) Y OTROS, *Empresas transnacionales y graves violaciones de derechos humanos en América Latina*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.
- AUGENSTEIN, D. Y JÄGERS, N. “Judicial Remedies: the issue of jurisdiction.”, en ÁLVAREZ RUBIO, J.J. Y YIANNIBAS, K (Eds.). *Human Rights in Business. Removal of Barriers to Access to Justice in the European Union*. Routledge, Abingdon, 2017.
- AYMERICH OJEA, I. Y GARCÍA CÍVICO, J. “La integración de responsabilidades públicas y privadas en la efectividad de los derechos humanos”, en MARULLO, M. C. Y ZAMORA CABOT, F.J. (Eds.). *Empresas y Derechos Humanos. Temas Actuales*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
- BONET PÉREZ, J. “Aproximación jurídica internacional al ejercicio de la jurisdicción civil universal frente a violaciones graves de derechos humanos”, *Deusto Journal of Human Rights*, núm. 5, 2020.
- CALVO CARAVACA, A.L., CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional privado*, vol. II, ed. núm. XVI, Editorial Comares, Granada, 2016.
- CLEVELAND, S., “After Kiobel”, *Journal of International Criminal Justice*, núm. 12, 2014,
- CROSER, M., DAY, M., VAN HUIJSTEE, M. & SAMKALDEN, C., “Vedanta v Lungowe and Kiobel v Shell: The Implications for Parent Company Accountability”, *Business and Human Rights Journal*, núm. 5(1), págs. 130-136, (doi.10.1017/bhj.2019.25).
- DEVA, S. “Empresas y derechos humanos: ¿momento de ir más allá del “presente”?, en RODRÍGUEZ GARAVITO, C. (Ed.), *Empresas y derechos humanos en el siglo XXI*. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2018.
- DEVA, S. Y BIRCHALL, D. (Eds.). *Research Handbook on Human Rights and Business*. Edward Elgar Publishing Limits, Cheltenham, 2020.
- ESTEVE-MOLTÓ, J.E., “La estrecha interdependencia entre la criminalidad de las empresas transnacionales y las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y del medio ambiente: lecciones del caso Bhopal.”, en *Revista Electrónica de Estudios Internacionales (REEI)*, núm. 32, 2016, (doi: 10.17103/reei.32.01)

- GARCÍA ÁLVAREZ, L. “Las acciones colectivas en los litigios internacionales por daños ambientales”, en *Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)*, núm. 30, 2015. (doi: 10.17103/reei.30.07)
- GAUKRODGER, D. Y GORDON, K. “Investor-State Dispute Settlement. A scoping Paper for the Investment Policy Community”, en OECD, *Working Papers on International Investment*, 2012.
- GUAMÁN HERNÁNDEZ, A. Y MORENO GONZÁLEZ, G. *Empresas transnacionales y derechos humanos: la necesidad de un instrumento vinculante*. Editorial Bomarzo, Albacete, 2018.
- GUZMÁN-DÍAZ, L. “To domestic courts worldwide: here is why you can disregard the August 2018 Partial Award from The Hague, Netherlands in Chevron-Ecuador Litigation”, en *The Journal of the Institute for Transnational Arbitration*, Vol. 2, Issue 1, 2020
- HÄUSLER, K., LUKAS, K. Y PLANITZER, J. “Company-based grievance mechanisms and international arbitration”, en ÁLVAREZ RUBIO, J.J. Y YIANNIBAS, K (Eds.). *Human Rights in Business. Removal of Barriers to Access to Justice in the European Union*. Routledge, Abingdon, 2017,
- HELMINEN, S., ALENIUS, J., WALTA, V., Y DONNER, S. *Judicial Analysis on the Corporate Social Responsibility Act*, Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Helsinki, 2020.
- HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J., GONZALEZ, E. Y RAMIRO, P., “Las empresas transnacionales y la arquitectura jurídica de la impunidad: responsabilidad social corporativa, lex mercatoria y derechos humanos”, en *Revista de economía crítica*, núm. 28, 2019.
- IRIARTE ÁNGEL, J.L. “Empresas Multinacionales y Derechos Humanos. Un análisis reciente desde la perspectiva española”, en CHIARA MARULLO, M. Y ZAMORA CABOT, F.J. (Eds.). *Empresas y Derechos Humanos. Temas Actuales*. Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
- JÄGERS, N. “Access to effective remedy: the role of information”, en DEVA, S. Y BIRCHALL, D. (Eds). *Research Handbook on Human Rights and Business*. Edward Elgar Publishing Limits, Cheltenham, 2020.
- KESSEDJIAN, C. “European Perspectives”, en ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHALER, L., DE DYCKER, S. (Eds), *Implementing the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights. Private International Law Perspectives*, Schulthess Éditions Romandes, Geneva – Zurich, 2017.
- KYRIAKAKIS, J. “Atrocities and victim redress: the opportunities and challenges of international criminal justice”, en DEVA, S. Y BIRCHALL, D. (Eds.). *Research Handbook on Human Rights and Business*. Edward Elgar Publishing Limits, Cheltenham, 2020.

- LAHIDJI, K. y BERNARD, A. Y OTROS, *Corporate Accountability for Human Rights Abuses A Guide for Victims and NGOs on Recourse Mechanisms*, FIDH, 3rd edition, 2016.
- MARES, R. “Liability within corporate groups: parent companies’ accountability for subsidiary human rights abuses”, en DEVA, S. Y BIRCHALL, D. (Eds.), *Research Handbook on Human Rights and Business*. Edward Elgar Publishing Limits, Cheltenham, 2020.
- MÁRQUEZ CARRASCO, C. Y VIVAS TESÓN, I. *La Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos por la Unión Europea y sus Estados Miembros*. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017.
- MÁRQUEZ CARRASCO, C. “Los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos de los estados miembros de la Unión Europea. Especial referencia al plan español.”, en MÁRQUEZ CARRASCO, C. Y VIVAS TESÓN, I. *La Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos por la Unión Europea y sus Estados Miembros*. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017.
- MARTÍN-ORTEGA, O. *Empresas multinacionales y derechos humanos en derecho internacional*, Bosch, Barcelona, 2008.
- MARULLO, M. C., *El Alien Tort Claims Act de 1789: Su Contribución En La Protección De Los Derechos Humanos Y Reparación Para Las Víctimas*, Institut Català Internacional per la Pau Barcelona, 2014.
- MARULLO, M. C. Y ZAMORA CABOT, F.J. (Eds.). *Empresas y Derechos Humanos. Temas Actuales*. Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
- MARULLO, M. C. Y ZAMORA CABOT, F.J., “El Alien Tort Statute y las consecuencias del caso Kiobel en los litigios transnacionales sobre empresas y derechos”, en MARULLO, M. C. Y ZAMORA CABOT, F.J. (Eds.), *Empresas y Derechos Humanos. Temas actuales*. Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
- MELISH, T.J., “Volver a incluir “los derechos humanos” en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Cambiar de marco e incorporar los derechos de participación”, en RODRÍGUEZ GARAVITO, C. (Ed.). *Empresas y derechos humanos en el siglo XXI*. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2018
- OCDE Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, OECD Publishing. 2013, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202436-es>
- OCDE Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo: Tercera Edición, OECD Publishing, París, 2016, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264252479-en>
- OIT. Oficina Internacional de Trabajo, *Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social*, 5ª edición, Suiza, 2017.

- ONU, A/HRC/17/31, *Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"*, Nueva York y Ginebra, 27 de marzo de 2011.
- ONU, A/HRC/32/19, *Mejorar la rendición de cuentas y el acceso a las reparaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales*, Nueva York y Ginebra, 10 de mayo 2017
- ONU, Asamblea General, *Declaración Universal de Derechos Humanos*, 10 de diciembre 1948, 217 A (III). [https://undocs.org/es/A/RES/217\(III\)](https://undocs.org/es/A/RES/217(III))
- ONU, Asamblea general, *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966*, https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf
- ONU, Asamblea General, *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966*, https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf
- PIGRAU, A., “Empresas multinacionales y derechos humanos: la doble vía del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, en MARULLO, M. C. Y ZAMORA CABOT, F.J. (Eds.), *Empresas y Derechos Humanos. Temas actuales*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, págs. 49-50.
- PIGRAU SOLÉ, A., ÁLVAREZ TORNÉ, M., CARDESA-SALZMANN, A. Y OTROS. *Derechos Humanos y Empresas Europeas. Un manual práctico para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos*, Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona/ Universitat Rovira i Virgili, 2016,
- REQUEJO ISIDRO, M. “Effective Access to remedy: the Lago Agrio Litigation”, en ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHALER, L., Y DE DYCKER, S. (Eds), *Implementing the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights. Private International Law Perspectives*, Schulthess Éditions Romandes, Geneva – Zurich, 2017, págs. 93-115
- RODRÍGUEZ GARAVITO, C. (Ed.), *Empresas y derechos humanos en el siglo XXI*. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2018, pág.
- RUGGIE J.G., “¿Jerarquía o ecosistema? La regulación de los riesgos relativos a los derechos humanos provenientes de las empresas multinacionales”, en RODRÍGUEZ GARAVITO, C. (Ed.), *Empresas y derechos humanos en el siglo XXI*. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2018.
- SAINT DAHL, H. “The Implementation of the UN Principles on Business and Human Rights in Private International Law: US Experiences”, en ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHALER, L., DE DYCKER, S. (Eds), *Implementing the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights. Private International Law Perspectives*, Schulthess Éditions Romandes, Geneva – Zurich, 2017.

SEAONE, J.L. “El levantamiento del velo como mecanismo impeditivo de la elusión de la Responsabilidad Civil”, en *Revista de responsabilidad civil y seguro*, núm. 42, 2012,

TOLE MARTÍNEZ, J. “Debate sobre la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Derecho Humanos y empresas en Colombia: avances, críticas y retos.”, en OVEJERO PUENTE, A.M (Coord.) y OTROS, *Derechos humanos y empresas: balance y situación actual sobre el cumplimiento de los tres pilares*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

VAN DEN EECKHOUT, V. “The Private International Law Dimension of the Principles in Europe”, en ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHER, L., DE DYCKER, S. (Eds), *Implementing the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights. Private International Law Perspectives*, Schulthess Éditions Romandes, Geneva – Zurich, 2017.

VIVAS TESÓN, I. “La responsabilidad civil en los reglamentos de la Unión Europea en relación con la actividad de las empresas”, en MÁRQUEZ CARRASCO, C. Y VIVAS TESÓN, I. *La Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos por la Unión Europea y sus Estados Miembros*. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017.

ZAMORA CABOT, F.J., HECKENDORN URSCHER, L., DE DYCKER, S. (Eds), *Implementing the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights. Private International Law Perspectives*, Schulthess Éditions Romandes, Geneva – Zurich, 2017.

ZURUAGA JARAMILLO, L.N., “Hacia la visibilización de las víctimas invisibles vinculadas a las empresas transnacionales en América Latina”, en AMBOS, K. y BÖHM, M.L (Eds.) Y OTROS, *Empresas transnacionales y graves violaciones de derechos humanos en América Latina*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

Informes:

AMNISTÍA INTERNACIONAL, *On Trial: Shell in Nigeria. Legal actions against the oil multinational*, London, 2020.

FRA. European Union Agency for Fundamental Rights. Report on *Business and Human Rights - Access to Remedy*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020.

ZERK, J., *Corporate Liability for Gross Human Rights Abuses. Towards a Fairer and More Effective System of Domestic Law Remedies*, 2014.

Jurisprudencia:

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE):

STJUE de 01/03/2005, *Owusu v. Jackson*, C-281/02, ECR I-01383.

STJUE de 09/07/2020, *Verein für Konsumenteninformation v. Volkswagen AG*, C-343/2019, ECLI:EU:C:2020:534.

Alemania:

Regional Court (*Landgericht*) of Dortmund, *Jabir and others v. KiK Textilien und Non-Food GmbH*, Case No. 7 O 95/15.²

Estados Unidos:

U.S. Supreme Court, *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. et al.*, No. 10-1491, 133 S. Ct. 1659 (2013).

U.S. Supreme Court, *Daimler AG v. Bauman et al.*, No. 11-965, 571 US (2014).

Países Bajos:

Court of Appeal of The Hague, *Dooh and Milieudefensie v Royal Dutch Shell and SPDC, and Dooh and Milieudefensie v Shell Petroleum N.V. and the 'Shell' Transport and Trading Company Ltd*, [2015] ECLI:NL:GHDHA:2015:3586, 18 December 2015.

Court of The Hague, *Esther Kiobel v Royal Dutch Shell PLC*, [2019] ECLI:NL:RBDHA:2019:4233, 1 May 2019.

Procesos ISDS:

ICSID, *Veolia Propreté v. Arab Republic of Egypt*, Case No. ARB/12/15, 25 May 2018.

Reino Unido:

Royal Courts of Justice, *Okpabi and others v. Royal Dutch Shell Plc and another*, [2018] EWCA Civ 191, Case No: A1/2017/0407 and 0406, London, 14 February 2018.

UK Supreme Court, *Vedanta Resources PLC v Lungowe*, [2019] UKSC 20, 19 April 2019.